



Ciudad de México, doce de abril de dos mil veinticuatro

**Vistas** las constancias que integran el expediente del procedimiento de acceso a la información pública relativo a la solicitud **330026324000537**, para resolver sobre la **inexistencia, clasificación confidencial y reservada** manifestada por la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público y:

## **R E S U L T A N D O**

**1. Solicitud.** El catorce de febrero del dos mil veinticuatro, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se recibió la solicitud en la que se requirió:

**Descripción de la solicitud:** *"Se solicita, en versión digital todas y cada una de las resoluciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (incluyendo Resoluciones Finales de Verificación, Resoluciones de Cierre o cualquier otra emitida en términos de los LINEAMIENTOS para la elaboración y presentación de los costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en los contratos y asignaciones; la verificación contable y financiera de los contratos, y la actualización de regalías en contratos y del derecho de extracción de hidrocarburos (los "Lineamientos")) durante los periodos comprendidos entre los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, en ejercicio de sus facultades de verificación, en las cuales determine si: (a) ciertos costos incurridos bajo un contrato de Exploración y/o Extracción ("CEE") son recuperables o no son recuperables; o (b) en general, cualquier otro ajuste a las Contraprestaciones del CEE; o (c) si se determinó que las inconsistencias o conclusiones detectadas en la verificación fueron aclaradas o subsanadas. Si esas resoluciones cuentan con información confidencial, se solicita se proporcione en "Versión Pública. Si la información es materia o se encuentra relacionada con un proceso deliberativo, entonces se solicita que se proporcione cualquier información que no afecte el proceso deliberativo en cuestión, incluyendo los datos del CEE sobre el cual recayó la resolución y si en la resolución se determinó ajustar las contraprestaciones o no y en qué monto."(sic)*

**Medio de entrega:** *"Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT"*

**2. Turno.** En esa misma fecha mediante oficio UT.926/2024 la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público turnó dicha solicitud a la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público (SSHCP).



**3. Requerimiento de Información Adicional.** El veinte de febrero de dos mil veinticuatro se notificó un requerimiento al ciudadano para efectos de que precisara "... si: (a) ciertos costos incurridos bajo un contrato de Exploración y/o Extracción ("CEE") son recuperables o no son recuperables; o (b) en general, cualquier otro ajuste a las Contraprestaciones del CEE; o (c) si se determinó que las inconsistencias o conclusiones detectadas en la verificación fueron aclaradas o subsanadas, misma que desahogó el veintidós de febrero del año en curso los siguientes términos:

*"En respuesta a la prevención realizada mediante la nota número 020/2023, con respecto a la solicitud con folio 330026324000537, se precisa que se están solicitando todas y cada uno de las resoluciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los períodos indicados en dicha solicitud, en ejercicio de sus facultades de verificación bajo los Lineamientos para la elaboración y presentación de los costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en los contratos y asignaciones; la verificación contable y financiera de los contratos, y la actualización de regalías en contratos y del derecho de extracción de hidrocarburos (los "Lineamientos"), en las que se haya determinado que ciertos costos incurridos bajo un contrato de Exploración y/o Extracción (el "CEE") son recuperables o no son recuperables y también se están solicitando aquellas resoluciones en las que se haya determinado cualquier otro ajuste a las Contraprestaciones del CEE y también se están solicitando aquellas resoluciones en que se haya determinado que las inconsistencias o conclusiones detectadas en la verificación fueron aclaradas o subsanadas. Es decir, se están solicitando todas las resoluciones emitidas bajo los Lineamientos en los períodos indicados en las que se haya resuelto cualquiera de las cuestiones antes referidas."*

**4. Ampliación de plazo.** El veintidós de febrero de dos mil veinticuatro se recibió en la Unidad de Transparencia la nota 021/2024. mediante la cual la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó la ampliación del plazo para emitir la respuesta correspondiente, la cual fue aprobada por este órgano colegiado mediante resolución **SHCP/C.T.236/2024** del veintiuno de marzo del año en curso.

**5. Respuesta.** El nueve de abril de dos mil veinticuatro, se recibió en la Unidad de Transparencia de esta secretaría la atenta nota 031/2024 del ocho de abril del año en curso, mediante el cual la SSHCP por conducto de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios y Sobre Hidrocarburos (UPINTySH), manifestó lo siguiente:

"[...]"



A este respecto, con fecha 19 de febrero de 2024, mediante número de nota 20/2023 la Coordinación de Análisis, Supervisión y Verificación de Ingresos sobre Hidrocarburos (CASVISH) solicitó información adicional a efecto de aclarar si la información solicitada es conjunta u optativa, en ese sentido, el día 22 de febrero de 2024, el ciudadano dio respuesta a dicho Requerimiento, misma que a continuación se indica:

*"En respuesta a la prevención realizada mediante la nota número 020/2023, con respecto a la solicitud con folio 330026324000537, se precisa que se están solicitando todas y cada uno de las resoluciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los periodos indicados en dicha solicitud, en ejercicio de sus facultades de verificación bajo los Lineamientos para la elaboración y presentación de los costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en los contratos y asignaciones; la verificación contable y financiera de los contratos, y la actualización de regalías en contratos y del derecho de extracción de hidrocarburos (los "Lineamientos"), en las que se haya determinado que ciertos costos incurridos bajo un contrato de Exploración y/o Extracción (el "CEE") son recuperables o no son recuperables y también se están solicitando aquellas resoluciones en las que se haya determinado cualquier otro ajuste a las Contraprestaciones del CEE y también se están solicitando aquellas resoluciones en que se haya determinado que las inconsistencias o conclusiones detectadas en la verificación fueron aclaradas o subsanadas. Es decir, se están solicitando todas las resoluciones emitidas bajo los Lineamientos en los periodos indicados en las que se haya resuelto cualquiera de las cuestiones antes referidas."(sic)*

Derivado de lo anterior, esta Unidad administrativa y sus áreas adscritas de conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción XLV y 17 D, fracciones XII y XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (RISHCP) vigente; realizaron una búsqueda amplia y exhaustiva de la información solicitada (circunstancia de modo), en los archivos de trámite y de concentración, tanto físicos como digitales (circunstancia de lugar), en consecuencia, respecto del periodo correspondiente a los años de **2015 a 2017** (circunstancia de tiempo) no se localizó expresión documental alguna que coincidiera con lo solicitado por el ciudadano, ya que durante ese periodo la entonces Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos (UIH) actualmente CASVISH no inició ningún procedimiento de verificación, toda vez que la unidad aún se encontraba en la etapa normativa para poder llevar a cabo las atribuciones conferidas en el RISHCP, por lo que con fecha 6 de marzo de 2015 emitió los "LINEAMIENTOS para la elaboración y presentación de los costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en los contratos y asignaciones; la verificación contable y financiera de los contratos, y la actualización de regalías en contratos y del derecho de extracción de hidrocarburos" (Lineamientos) en el cual se contemplan los procedimientos de Verificación y el tiempo máximo de duración de los mismos, estableciendo en el numeral 63 que la **duración máxima para realizar una verificación será de 24 meses.**

De igual forma, hasta el 30 de noviembre de 2017, se registraron los Manuales de Procedimiento: **1)** Verificación mediante auditoría a través de requerimiento de información de los aspectos contables y financieros de los Contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos; así como, **2)** Verificación mediante auditoría a través de procedimientos analíticos de los ajustes y correcciones al cálculo de las Contraprestaciones y registros contables y financieros solicitados por el Contratista de los Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, los cuales son públicos y pueden ser consultados en el siguiente enlace:

[https://www.sipot.hacienda.gob.mx/work/models/SIPOT/Fracciones/Fraccion\\_I/14.pdf](https://www.sipot.hacienda.gob.mx/work/models/SIPOT/Fracciones/Fraccion_I/14.pdf)

**1)** desde la página 1, 136 y

**2)** desde la página 1,410

Aunado a lo anterior, para poder iniciar una verificación se requiere de la existencia de datos o información registrada por el Contratista relacionada con sus actividades, tales como costos incurridos, registrados bajo un presupuesto autorizado por la CHN o bien volúmenes y precios derivados de la producción de hidrocarburos; en ese sentido, se precisa que el primer Contrato de Exploración y Extracción de Hidrocarburos se firmó el 4 de septiembre de 2015.





En consecuencia, durante el período 2015 a 2017 no se encontró expresión documental alguna que coincida con lo solicitado por el ciudadano, toda vez que, si bien esta unidad administrativa cuenta con ciertas atribuciones para llevar a cabo la verificación de los aspectos financieros de los CEE, **lo cierto es que, durante ese período, la entonces UIISH actualmente CASVISH no emitió resolución alguna.**

En virtud de lo anterior, se considera aplicable el criterio 14/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuyo texto refiere:

**“Inexistencia.** La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información solicitada e implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, no obstante que cuenta con facultades para poseerla”.

Por lo anterior, con base a lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 141, fracción II y 143 de la LFTAIP, así como en los artículos 44, fracción II, 138, fracción II y 139 de la LGTAIP, resulta procedente que el Comité de Transparencia de esta Secretaría emita la resolución correspondiente que confirme la presente determinación.

Ahora bien, respecto a los años **2018 a 2022** se precisa que se localizaron un total de **82** resoluciones las cuales se encuentran integradas de la siguiente manera 77 resoluciones que se ponen a disposición en versión pública y 5 se clasifican como reservadas.

De las 77 resoluciones, representan un total de 1,858 fojas se proporciona un resumen de la información por año en el siguiente cuadro:

Periodo (año)	No. de resoluciones	Fojas totales por Período
2018	10	180
2019	5	103
2020	8	63
2021	31	567
2022	23	945
<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>1,858</b>

Asimismo, del análisis a la información contenida en cada una las resoluciones, se observó que cuentan con información de carácter confidencial de conformidad con lo señalado en los artículos 116 párrafos primero, tercero y cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracciones I, II y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, razón por la cual se elaborará **versión pública de esas resoluciones** conforme la información contenida en el siguiente cuadro:

Datos a clasificar	Argumentos	Fundamentación
<b>Nombre de persona física</b>	Se trata de un dato personal identificativo, concerniente a una persona física identificada o identificable	Artículos 4, párrafo segundo, 111 y 116 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 3, 108, 113 fracción I, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), así como en los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I, numeral 1 y Sexagésimo primero de los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas” (Lineamientos Generales).
<b>Domicilio de persona física</b>	Se trata de un dato personal identificativo, concerniente a una persona física identificada o identificable	Artículos 4, párrafo segundo, 111 y 116 primer párrafo de la LGTAIP, 3, 108, 113 fracción I, y 118 de la LFTAIP, así como en los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I, numeral 1 y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales.



<b>Firma autógrafa de persona física</b>	Se trata de un dato personal identificativo concerniente a una persona física identificada o identificable	Artículos 4, párrafo segundo, 111 y 116 primer párrafo de la LGTAIP, 3, 108, 113 fracción I, y 118 de la LFTAIP, así como en los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I, numeral 1 y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales.
<b>Información contenida en CFDI's, relativa al Folio Fiscal, nombre de proveedores, RFC, concepto que avala la emisión del mismo y montos</b>	Se trata de datos personales identificativos y patrimoniales, concernientes a una persona física/moral identificada o identificable, relativa a información fiscal, egresos y servicios contratados.	Artículos 4, párrafo segundo, 111 y 116 primer párrafo de la LGTAIP, 3, 108, 113 fracción I, y 118 de la LFTAIP, así como en los Lineamientos Trigésimo Octavo, fracción I, numerales 1 y 6, y Sexagésimo primero de los Lineamientos Generales.
<b>Información proporcionada por el Contratista correspondiente a: volúmenes de producción proporcionados o registrados en el Sistema de Información para los pagos de las Asignaciones y Contratos de Hidrocarburos (SIPAC) por el Contratista, volúmenes y precios de comercialización, al valor</b>	Se clasifica como confidencial por secreto comercial.	Artículo 116 párrafo tercero de la LGTAIP y artículo 113, fracción II de la LFTAIP, en relación con el lineamiento Cuadragésimo cuarto, de los Lineamientos Generales.
<b>contractual de los hidrocarburos y a los montos correspondientes al cálculo de las contraprestaciones, la información relativa a los costos, gastos e inversiones que haya proporcionado el contratista así como los recuperables</b>		
<b>Información correspondiente a: políticas contables, administrativas, económicas y jurídicas.</b>	Información que comprende hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, de tal forma que con su difusión pueda ser de utilidad para agentes económicos diversos al sujeto, como lo puede ser los detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea.	Artículo 116 párrafo tercero de la LGTAIP y artículo 113, fracción III de la LFTAIP, en relación con el lineamiento Cuadragésimo cuarto, de los Lineamientos Generales.
<b>Información relativa a control interno, contractual, contable y de tecnologías de la información.</b>	En virtud de que, a través de los contenidos de información del documento de referencia, se pueden llegar a revelar datos que resulten útiles para una persona competidora, con lo que se colocaría en situación de desventaja a la persona titular de la información.	Artículo 116 párrafo tercero de la LGTAIP y artículo 113, fracción III de la LFTAIP, en relación con el lineamiento Cuadragésimo cuarto, de los Lineamientos Generales.
<b>Información relativa proveedores y transferencias.</b>	Se clasifica como confidencial por secreto comercial	Artículo 116 párrafo tercero de la LGTAIP y artículo 113, fracción II de la LFTAIP, en relación con el lineamiento Cuadragésimo cuarto, de los Lineamientos Generales.
<b>Información financiera</b>	Información que comprende hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, de tal forma que con su difusión pueda ser de utilidad para agentes económicos diversos al sujeto, como lo puede ser los detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus	Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 113, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en los Lineamientos Cuadragésimo, fracción II y Cuadragésimo Cuarto fracciones I, II, III y IV de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas"
	modificaciones o actas de asamblea.	

Ahora bien, en lo referente a la clasificación como confidencial por secreto comercial la información que de manera específica se señala en el cuadro anterior con fundamento en el artículo 116 párrafo tercero de la LGTAIP y artículo 113, fracción II de la LFTAIP, en relación con el lineamiento Cuadragésimo cuarto, de los Lineamientos Generales, se acreditan los supuestos siguientes:

I. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial;





Se hace del conocimiento que la información relativa a **volúmenes de producción proporcionados o registrados en el SIPAC por el Contratista, volúmenes y precios de comercialización, al valor contractual de los Hidrocarburos, a los montos correspondientes al cálculo de las contraprestaciones, costos, gastos e inversiones considerados recuperables**, contiene información derivada de las actividades comerciales en materia de Hidrocarburos de las empresas titulares de un Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos.

**II. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para preservarla;**

La información se resguarda con carácter de confidencial en el archivo de trámite de la unidad administrativa, siendo restringido el acceso a la misma, toda vez que únicamente puede ser consultada por el personal responsable de llevar a cabo las labores de verificación, en consecuencia, dicha información no se puede localizar en un repositorio público.

**III. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, y**

La información significa para su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, ya que contiene datos referentes a su situación financiera y contable relativa a sus activos, pasivos y capital que conforman su patrimonio, dado que con la valoración de la citada información se determinan los montos de las contraprestaciones que el particular debe recibir, o pagar al estado, o bien, los costos que le serán recuperados, lo que le representa un valor competitivo en el mercado que, de hacerse del dominio público, en cualquier tiempo, afectaría el desarrollo y estabilidad de la empresa y la sana competencia en el sector de hidrocarburos.

**IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.**

El artículo 58 fracciones I, inciso a) y g, y VI, inciso a) de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos prevé que el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deben publicar diversa información de manera mensual y por medios electrónicos, dentro de los cuales se contemplan los siguientes conceptos: a: los volúmenes de producción proporcionados o reportados en SIPAC por la CNH, los precios contractuales de los Hidrocarburos, así como los conceptos y montos correspondientes a los costos y gastos imprevistos; con lo anterior se demuestra que los conceptos enlistados en el numeral 1 antes señalados, no deben divulgarse por disposición legal al no contemplarse en el citado artículo.

Por otra parte, es de indicar que las 77 resoluciones se encuentran en formato físico, en consecuencia las versiones públicas tienen la misma suerte, por lo que se le solicita a la Unidad de Transparencia de la SHCP, señale al peticionario que la información se encuentra disponible en las siguientes modalidades, previo pago de los derechos:

- Copia simple (costo \$1.00 pesos por hoja)
- Copia certificada (costo \$26.00 pesos por hoja)

Asimismo, y en caso de requerir que la información se envíe por correo certificado al domicilio, se deberá cubrir una cuota adicional la cual dependerá del peso y lugar donde sea enviado.

En ese mismo sentido, también se le puede indicar al ciudadano que podrá tener acceso a dichas versiones, a través de consulta "in situ", en un horario de 10:00 a 15:00 horas, para lo que se solicita ponerse en contacto con la Unidad de Transparencia con correo electrónico [unidadtransparencia@hacienda.gob.mx](mailto:unidadtransparencia@hacienda.gob.mx) y teléfono 5536885814, con la finalidad de concretar la cita.

Ahora bien, de conformidad con los artículos 106, fracción I; 108, último párrafo; artículo 113, fracciones VIII y XI de la LGTAIP y 98 fracción I, 105 último párrafo, y 110, fracciones VIII y XI de la LFTAIP, se solicita a ese H. Comité confirme la **reserva de las 5 resoluciones**, mismas que a continuación se detallan:

	Núm. de oficio de la RFV	Fecha del oficio	No. de Juicio de Nulidad/Amparo	Fracción de Reserva
(1)	352-A-III-044	17 de junio de 2021	Procedimiento Conciliatorio	Fracción VIII
(2)	352-A-059	21 de febrero de 2022	Procedimiento Conciliatorio	Fracción VIII
(3)	352-A-III-020	22 de octubre de 2020	JN: 24202/20-17-14-6 y Procedimiento Conciliatorio	Fracciones VIII y XI
(4)	352-A-III-021	22 de octubre de 2020	JN: 24351/20-17-11-4	Fracción XI
(5)	352-A-III-043	22 de marzo de 2021	JA: 443/2021	Fracción XI

Derivado de la tabla anterior, se precisa que se presenta la siguiente prueba de daño considerando la fracción aplicable a cada una de las resoluciones de las cuales se solicita su reserva:

**PRUEBA DE DAÑO**

**A. Argumentación prueba de daño artículo 113 fracción VIII de la LGTAIP.**

En términos de lo dispuesto en los artículos 97 de la LFTAIP; 17, fracción VIII y 17 D, fracciones XII y XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (RISHCP); y en los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas"



(Lineamientos Generales), me permito solicitar por conducto de ese órgano colegiado, la confirmación de la reserva por cinco años de las Resoluciones Finales de Verificación emitidas por la Coordinación de Análisis, Supervisión y Verificación de Ingresos sobre Hidrocarburos (CASVISH), mediante oficios siguientes: (1) 352-A-III-044, (2) 352-A-059 y (3) 352-A-III-20 de fechas, 17 de junio del 2021, 21 de febrero del 2022 y 22 de octubre del 2020, respectivamente, de acuerdo a lo siguiente:

El lineamiento Trigésimo tercero, fracción I de los Lineamientos Generales, precisa que, para la aplicación de la prueba de daño, a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, los sujetos obligados deben citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la LGTAIP, vinculándola con el lineamiento específico de dicho ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada.

En tal virtud, a continuación, se cita la fracción **VIII del artículo 113**, de la LGTAIP aplicable a la presente prueba de daño:

*"Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

*VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;"*

La cual se vincula con el Lineamiento Vigésimo Séptimo, de los Lineamientos Generales, el cual establece que:

*"Vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente:*

- I. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio;*
- II. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo;*
- III. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y*
- IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.*

*...Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última determinación, sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por cualquier causa no sea posible continuar con su desarrollo.*

*..."*

**[Énfasis añadido]**

Previo a desarrollar cada uno de los elementos de la prueba de daño previstos en el numeral Vigésimo séptimo de los Lineamientos, se proporciona la siguiente información a manera de contexto, respecto de la función que desempeña esta unidad administrativa en cuanto al tema sobre el que versa la solicitud de información, esto es, respecto a las resoluciones finales emitidas por esta Unidad, en ejercicio de sus facultades de verificación, en las cuales determina si ciertos costos incurridos bajo un contrato de Exploración y/o Extracción son recuperables o no son recuperables:

La extinta Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos (UIH), cuyas atribuciones pasaron a formar parte de la actual Unidad de Política de Ingresos no Tributarios y sobre Hidrocarburos (UPINTSH) en el nuevo RISHCP publicado el 06 de marzo de 2023 y su última reforma el 17 de enero de 2024, la cual cuenta con facultades excepcionales derivadas de la reforma constitucional en materia de energía de 2013.

En ese sentido, se debe destacar que uno de los objetivos centrales de la reforma constitucional en materia de energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, fue el de transformar la industria energética nacional a fin de dotar al Estado Mexicano de herramientas **que le permitan maximizar los ingresos derivados de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, en beneficio de la Nación**. Entre los mecanismos adoptados se incluye la posibilidad de que el Estado celebre contratos de exploración y extracción de hidrocarburos con particulares **cuyo objetivo primordial es la obtención de ingresos para el Estado, en beneficio del interés público**.

Para asegurar el objetivo de la reforma constitucional, el legislador determinó que la forma más conveniente de adjudicar dichos contratos, sería mediante la realización de licitaciones públicas en las que participen y compitan las empresas interesadas, en igualdad de condiciones y de forma transparente. **Asimismo, se incluyeron reglas que permitan "maximizar los ingresos del Estado para lograr el beneficio para el desarrollo de largo plazo"**.

Por ello, en su momento el Ejecutivo Federal **dotó a esta unidad de atribuciones para verificar las operaciones de los aspectos contables y financieros, así como los ingresos derivados de dichos contratos, con el propósito de garantizar el correcto pago de las contraprestaciones que correspondan al Estado, en beneficio del interés público**.





En consecuencia, la extinta UIISH, actualmente UPINTSH, tiene la responsabilidad de verificar que las operaciones referentes a los aspectos contables y financieros, así como, **el pago de las contraprestaciones de dichos contratos, se apeguen a lo establecido en los mismos y en la normatividad aplicable**, dichas atribuciones se encuentran previstas en los artículos 17, fracción XLIV y 17 D, fracciones XII y XVII del RISHCP las cuales se citan a continuación:

**\*Artículo 17.-** La Unidad de Política de Ingresos no Tributarios y sobre Hidrocarburos tiene las atribuciones siguientes:

*I. a XLIII. ...*

XLIV. Instruir al Servicio de Administración Tributaria, a los auditores o inspectores externos contratados para ello, así como, a la persona titular de la Coordinación de Análisis, Supervisión y Verificación de Ingresos sobre Hidrocarburos, según sea el caso, la realización de las auditorías y visitas a contratistas, en términos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos;

**\*Artículo 17 D.-** La Coordinación de Análisis, Supervisión y Verificación de Ingresos sobre Hidrocarburos tiene las atribuciones siguientes:

*I. a XI. ...*

XII. Realizar, de acuerdo con las instrucciones de la persona titular de la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios y sobre Hidrocarburos, las atribuciones que correspondan a la Secretaría en materia de verificación de los aspectos financieros del pago de las contraprestaciones que correspondan al Estado y al contratista derivado de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos a que se refieren la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, así como de las operaciones y registros contables derivados de dichos contratos, mediante la revisión de los registros de información con que se cuente, o de solicitudes de información que realice a los contratistas, partes relacionadas y a terceros, o bien, de visitas o auditorías, conforme a lo que establece la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, el contrato respectivo, los lineamientos que al efecto emita la Secretaría y demás disposiciones jurídicas aplicables;

*XIII. a XVI. ...*

XVII. Determinar los ajustes y correcciones que correspondan a las contraprestaciones establecidas en los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos a que se refieren la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que deriven de las verificaciones;

En ese contexto, el **22 de octubre del 2020, 17 de junio del 2021, y 21 de febrero del 2022, respectivamente**, la persona entonces titular de la CASVISH y la persona entonces titular de la UIISH, mediante oficios números **(1) 352-A-III-20, (2) 352-A-III-044 y (3) 352-A-059**, respectivamente emitieron las citadas Resoluciones Finales de Verificación, relativas a ajuste a contraprestaciones, reconocimiento de Costos y ajuste en el monto de activos, en virtud de las auditorías que se llevaron a cabo.

Ahora bien, con fechas 6 de junio de 2022, 16 de marzo y 12 de abril del 2023, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), mediante oficios 230.213/2022, 230.222/2023 y 230.272/2023, solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se pronunciara respecto a participar en el **procedimiento de conciliación** solicitado por las personas morales a las que se llevaron a cabo las auditorías y a las que se notificaron las RFV (Contratistas), a efecto de modificar los términos de las RFV que nos ocupan. **(Anexo 1)**

En respuesta a las solicitudes anteriores, mediante oficios números 352-A-III-106, 352-A-III-051, y 352-A-III-052 de fechas 8 de noviembre del 2022 el primero y los otros dos del 12 de mayo del 2023, respectivamente la CASVISH manifestó que, se proporcionaría la documentación y apoyo técnico en relación con la auditoría de la cual derivó la emisión de las citadas RFV. **(Anexo 2)**

Actualmente, los procedimientos de conciliación se encuentran en curso ante el conciliador autorizado por la CNH y los Contratistas, partes de los Contratos.

Ahora bien, a efecto de acreditar lo señalado en el Lineamiento General Vigésimo Séptimo, se detalla lo siguiente:

**I. Existencia de un Proceso deliberativo en curso y su fecha de inicio.**

- Procedimientos de conciliación instaurados por cada uno de los Contratistas ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos los días 11 de mayo del 2022, 3 de abril del 2023 y 3 de marzo del 2023, respectivamente, los cuales a la fecha se encuentran en curso.

Por lo anterior, se acredita la existencia de tres procedimientos deliberativos que se iniciaron con motivo de la emisión de las RFV, de los que, el resultado incidirá en la revaloración que en su caso, se tendrá que realizar por parte de los servidores públicos de la UPINTSH, a efecto de cumplir con el acuerdo que derive de cada una de las conciliaciones.

En este sentido, es evidente que la información solicitada se encuentra sujeta a un procedimiento deliberativo, al tratar de modificar los resultados y efectos de las RFV, a través de una conciliación.

**II. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo.**





A este respecto la información solicitada por el ciudadano consistente en las RFV descritas con anterioridad, en las cuales se determinaron para la primera ajustes a contraprestaciones, para la segunda se determinó si ciertos costos incurridos bajo el Contrato para la Extracción de Hidrocarburos, son recuperables o no, y para la tercer se determinaron ajustes en el monto de los Activos, resoluciones que se emitieron con base en el análisis que se realizó a la siguiente información:

- i) Información registrada por los Contratistas en el Sistema de Información para los Pagos de las Asignaciones y Contratos de Hidrocarburos (SIPAC),
- ii) Datos, informes, documentos y demás información, proporcionada por los Contratistas y/o sus Partes Relacionadas o algún Tercero derivado de las labores de Verificación que realiza la SHCP.
- iii) Normatividad existente, tales como la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, "LINEAMIENTOS para la elaboración y presentación de los costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en los contratos y asignaciones; la verificación contable y financiera de los contratos, y la actualización de regalías en contratos y del derecho de extracción de hidrocarburos" (Lineamientos de Costos) y el Contrato; y
- iv) Los procedimientos internos de auditoría con los que cuenta la SHCP.

En este sentido, la CASVISH mediante el análisis de dicha información, la aplicación de esa normatividad, así como, de los Contratos, realiza interpretaciones y toma criterios para la determinación del correcto cálculo de contraprestaciones, la procedencia o improcedencia de los costos incurridos y ajustes a los montos de los Activos, mismos que serán objeto de revisión mediante el proceso deliberativo en la conciliación.

Ahora bien, como ha quedado demostrado la solicitud de conciliación, aún se encuentran en proceso por lo que una vez concluida podría derivar en la modificación del contenido de las RFV.

Por lo antes expuesto, es claro y evidente que la RFV, contiene criterios y puntos de vista de los servidores públicos que participan en la auditoría, por lo que el proporcionar la información causaría un gran perjuicio al procedimiento deliberativo que se lleva a cabo para la determinación de éstos al generar una ventaja hacia los Contratistas que sean auditados en un futuro, al conocer los citados criterios, en tal situación podrá considerarse como información reservada, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, en consecuencia se acredita lo indicado en la **fracción II** del Lineamiento General Vigésimo Séptimo.

**III. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y**

La información solicitada por el ciudadano se encuentra relacionada de manera directa con cada uno de los procesos deliberativos, esto es así, toda vez que como ya quedó demostrado existen tres **procedimientos de conciliación**, los cuales versan sobre el contenido y efectos de las RFV.

**IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.**

A este respecto, resulta importante reiterar que el hecho de que los Contratistas hayan controvertido las RFV, al haber solicitado el inicio de los **procedimientos de conciliación** establecidos en el Contrato, podría implicar una modificación a los efectos de las RFV, es por ello que la información solicitada aún **no es definitiva, por lo que su difusión podría llegar a menoscabarla implementación de los asuntos sometidos a deliberación**, es decir, el análisis realizado por los servidores públicos que resulta en determinaciones basadas en las disposiciones contractuales y normativas aplicables, así como en circunstancias particulares de la operación de las actividades petroleras realizadas por cada Contratista.

Para lo antes expuesto, sirve de apoyo el criterio 04/10 denominado "Los documentos relacionados con las actuaciones del Órgano Interno de Control no necesariamente forman parte de un proceso deliberativo" y el 16/13 denominado "Insumos informativos o de apoyo. No forman parte de los procesos deliberativos", los cuales señalan lo siguiente:

**Criterio 04/10:**

En la clasificación de información con base en el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, **las dependencias y entidades deben distinguir claramente entre la información que en sí misma registra el proceso deliberativo o el sentido de la decisión**, y aquella que no se relaciona de manera directa con la toma de decisiones como es el caso de un insumo informativo o de apoyo en un expediente del proceso deliberativo. **En el primer supuesto se tiene que la información se encuentra ligada de manera directa con los procesos deliberativos, y su difusión puede llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación e implementación del proyecto materia del proceso deliberativo**; mientras que la segunda no constituye en sí misma las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que constituyen el proceso deliberativo y, por tanto, su difusión no afecta de manera alguna la decisión que se pudiese llegar a adoptar.

[Énfasis añadido]



**Criterio 16/13:**

Al clasificar información con base en el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, **las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deben distinguir entre la información que en sí misma documenta el proceso deliberativo o el sentido de la decisión a adoptar**, de aquella que no se relaciona de manera directa con la toma de decisiones, como es el caso de un insumo informativo o de apoyo del proceso deliberativo. **En el primer supuesto, se tiene que la información se encuentra ligada de manera directa con los procesos deliberativos, y su difusión puede llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación e implementación del objeto materia del proceso**, mientras que los insumos informativos o de apoyo no forman parte de las opiniones, recomendaciones o puntos de vista del proceso deliberativo y, por tanto, su difusión no afecta la decisión que se pudiese llegar a adoptar.

**[Énfasis añadido]**

En este sentido, es claro que las RFV son el documento principal para desarrollar el proceso deliberativo por lo que la información contenida en la misma se encuentra directamente relacionada con la toma de decisiones, en tal situación, su difusión como ya se señaló con anterioridad podría interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de, en este caso, las RFV solicitadas, en consecuencia estas tres resoluciones deberían clasificarse como reservadas hasta en tanto se dé por concluido el proceso deliberativo y se adopte de manera concluyente la última determinación quedando sin materia cada uno de los procesos, es decir, cause estado o bien, el Contratista en el procedimiento de conciliación convenga con su contraparte el resultado de la RFV.

A este respecto, sirve de apoyo por analogía la siguiente tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro digital 2000234 de la Décima Época con número 1ª VIII/2012 (10a.):

**INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).**

Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la protección del interés público, los artículos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de clasificación el de información reservada. El primero de los artículos citados establece un catálogo genérico de lineamientos bajo los cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la información pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar negociaciones o relaciones internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio al cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos, impartición de justicia, recaudación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos jurisdiccionales, **mientras las resoluciones no causen estado**. Por otro lado, con un enfoque más preciso que descriptivo, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino específico, de supuestos en los cuales la información también se considerará reservada: 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas; 4) **expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estado**; 5) **procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva**; o 6) **la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos y que formen parte de un proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una decisión definitiva**. Como evidencia el listado anterior, la ley enunció en su artículo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los lineamientos genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador quiso destacar de modo que no se presentasen dudas respecto a la necesidad de considerarlos como información reservada.

Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Adicional a lo anterior, el artículo 104 de la LGTAIP, prevé lo siguiente:

*"En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:*





*I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;*

*II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y*

*III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio."*

En este sentido, de conformidad con el artículo antes citado, la presente solicitud se motiva con base en las siguientes consideraciones respecto de las fracciones I, y II, del citado artículo 104, es de señalar que la divulgación de la información solicitada, sin lugar a dudas, representa un riesgo real demostrable e identificable para el interés público, toda vez que, ocasionaría pérdidas en los ingresos del Estado que se traducirían en dejar de realizar proyectos prioritarios y estratégicos para el país que beneficien a la población, tales como obras de infraestructura en educación y salud, y diversos servicios, lo que invariablemente se traduce que su difusión en consecuencia ocasione un riesgo de perjuicio mayor.

En consecuencia, en cuanto a la fracción III del mismo artículo, dicha limitación entendiéndose como la reserva, se adecua al principio de proporcionalidad al no afectar la posibilidad de llevar a cabo proyectos prioritarios en beneficio de la sociedad en general, en tal situación resulta ser el medio menos restrictivo para evitar un mayor perjuicio.

Finalmente, en cuanto a que la **reserva se lleve a cabo por un período de 5 años**, tiene su sustento en el hecho que, al estar en presencia de medios de solución de controversias, conforme a la normatividad específica de cada uno, sobre todo en **procedimientos de conciliación**, existen diversas instancias y acciones jurídicas para resolverse en definitiva, lo que puede llevarse hasta 5 años o más.

A continuación, se describe brevemente el contenido general de las RFV:

- Datos personales como son nombre del representante legal
- Denominación social del contratista, así como su domicilio.
- Denominaciones o razones sociales de diversos proveedores de los contratistas auditados.
- Registro Fiduciario otorgado por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
- Montos y conceptos relacionados con la contabilidad de los Contratistas auditados.
- Datos relacionados con documentos de facturación (CFDI's o comprobantes extranjeros).
- Detalle de criterios internos mediante los cuales se evalúa la procedencia o improcedencia de los costos registrados que serán recuperables.
- Elementos de prueba aportados por el contratista a fin de acreditar la procedencia de los costos registrados.

Por lo expuesto, resulta imperativo que la UPINTSH minimice el riesgo de que dicha información pueda ser conocida por una persona ajena a ese derecho, ya que la misma se relaciona de manera directa con la maximización de los ingresos del Estado, derivado de la verificación de los aspectos financieros del pago de las contraprestaciones establecidas en los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos.

De lo anterior, se observa que el presente riesgo se acentúa si se da a conocer la información proporcionada por los Contratistas, así como los criterios empleados por el personal de la CASVISH, para la verificación del correcto pago de las Contraprestaciones establecidas en los contratos para exploración y extracción de hidrocarburos, pues estos datos podrían ser utilizados de manera dolosa en perjuicio del Estado Mexicano y de los propios contratistas, ya que con dicha información las empresas del ramo o sector de hidrocarburos, pueden implementar estrategias o medidas que les permita incrementar la recuperación de costos y en consecuencia se verían afectados los ingresos del Estado Mexicano.

Ahora bien, el perjuicio que supone la divulgación de la información contenida en las RFV, supera el interés público de que ésta se difunda, toda vez que al darse a conocer dicha información se puede comprometer la maximización de los ingresos en favor del Estado Mexicano, disminuyendo con ello los ingresos de la Nación; por ende, es de vital importancia que se otorgue a la misma la condición de reservada.

#### **B. Argumentación prueba de daño artículo 113 fracción XI de la LGTAIP.**

En términos de lo dispuesto en los artículos 97 de la LFTAIP; 17, fracción VIII y 17 D, fracciones XII y XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (RISHCP); y en los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas" (Lineamientos Generales), me permito solicitar por conducto de ese órgano colegiado, **la confirmación de la reserva por cinco años de las Resoluciones Finales de Verificación** con número de oficio **(3) 352-A-III-020, (4) 352-A-III-021 y (5) 352-A-III-043** de fechas, las dos primeras del **22 de octubre de 2020 y la última del 22 de marzo de 2021**, emitidas por la entonces persona titular de la CASVISH, de acuerdo a lo siguiente:

- (3)** El 11 de mayo del 2021, el representante legal del Contratista al que se le notificó la RFV, interpuso demanda de nulidad, en contra de la RFV con número de oficio 352-A-III-020, la cual fue radicada en la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), donde se le asignó el número de expediente





24202/20-17-14-6, quien sobreseyó el juicio; por lo que, el Contratista interpuso recurso de reclamación, el cual fue resuelto en el sentido de confirmar el acuerdo que sobresee el juicio, en consecuencia el citado Contratista interpuso juicio de amparo, el cual con fecha 15 de noviembre se resolvió ampara y proteger al quejoso, en cumplimiento a éste el citado TFJA dio cumplimiento a la sentencia admitiendo a trámite la demanda de nulidad interpuesta por el actor, en consecuencia aún se encuentra pendiente de resolver. **(Anexo 3)**

**(4)** El 2 de mayo del 2022, el representante legal del Contratista al que se le notificó la RFV, interpuso demanda de nulidad, en contra de la RFV con número de oficio 352-A-III-021, la cual fue radicada en la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del TFJA, donde se le asignó el número de expediente 24351/20-17-11-4, quien desechó la demanda; por lo que, el Contratista interpuso recurso de reclamación, con fecha 6 de diciembre de 2023 se resolvió el recurso de reclamación interpuesto en el sentido de confirmar el auto mediante el cual se desechó la demanda en el juicio de nulidad, en consecuencia cabe señalar que se encuentra transcurriendo el término de ley para que la parte actora interponga el medio de defensa legal correspondiente. **(Anexo 4)**

**(5)** El 20 de agosto del 2021, el representante legal del Contratista al que se le notificó la RFV con número de oficio 352-A-III-076, interpuso demanda de amparo, en contra de la RFV con número 352-A-III-043, la cual fue radicada en la Décimo Cuarta de Distrito Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, donde se le asignó el número de expediente I-443/2021, con fecha 4 de enero de 2023 el citado Tribunal notificó la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto del Centro Auxiliar de Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en la cual resolvió amparar y proteger al Contratista, en contra de la RFV emitida por la CASVISH, por lo que, esta autoridad con fecha 27 de abril de 2023 se interpuso recurso de revisión, el cual aún está pendiente de resolver. **(Anexo 5)**

A este respecto se invoca lo previsto por la fracción XI, del artículo 113, de la LGTAIP el cual señala que como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación se ubique en el siguiente supuesto:

***XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado.***  
***[Énfasis añadido]***

Asimismo, se vincula con el Lineamiento Trigésimo, de los Lineamientos Generales, el cual establece que:

**"Trigésimo.** De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos:

- I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y
- II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.
- III. Que su difusión afecte o interrumpa la libertad de decisión de las autoridades dentro del juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y
2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada."

En ese sentido, a efecto de demostrar que se acreditan los elementos de reserva señalados en el Lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales, se realiza el siguiente análisis:

Respecto de la **fracción I, del Lineamiento Trigésimo** de los Lineamientos Generales, es de indicar que se debe acreditar la existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional que se encuentre en trámite; a este respecto, como ya se indicó las RFV se encuentran controvertidas por los Contratistas ante el TFJA, por lo que se mantiene en trámite los procedimientos llevados a cabo por la CASVISH, ya que de admitirse las demandas y, como resultado del análisis de legalidad que realice el TFJA a las RFV, se podrían declarar las nulidades de estas, o bien la nulidades para efectos (modificación) o la legalidad de las mismas, por lo que no se pueden considerar como definitivas hasta en tanto no causen estado, es por ello que se reitera que las mismas aún se encuentran en trámite.



Ahora bien, en razón de lo señalado por la **fracción II, del Lineamiento Trigésimo** de los Lineamientos Generales, el cual requiere que se acredite que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento, el solicitante de información solicita **las resoluciones finales emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de verificación, en las cuales determinaron ajustes a contraprestaciones; si ciertos costos incurridos bajo un contrato de Exploración y/o Extracción son recuperables o no son recuperables; y ajustes en el monto de los Activos.**

En este sentido, cabe precisar que, el contenido de cada una de las RFV es producto de la aplicación del procedimiento previsto en los Lineamientos de Costos, es decir, contiene el señalamiento de las actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento administrativo.

Por lo que hace a la **fracción III, del Lineamiento Trigésimo** de los Lineamientos Generales, en cuanto a acreditar que la difusión de la información solicitada afecte o interrumpa la libertad de decisión de las autoridades dentro del juicio o del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, es de indicar que el proporcionar la información se puede tornar en una afectación para las auditorías (procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio), toda vez que, el análisis realizado por los servidores públicos que resulta en determinaciones basadas en las disposiciones contractuales y normativas aplicables, así como en circunstancias particulares de la operación de las actividades petroleras realizadas por cada Contratista, sin que ello resulte en un criterio aplicable para todas las auditorías que se lleven a cabo.

Por lo anterior, el difundir la información solicitada podría generar una falsa apreciación por parte de los Contratistas si llegaran a ser sujetos de auditoría y pretendan presentar argumentos inequívocos sobre la base de las consideraciones que se vierten en las resoluciones, aunado a que, como ya se indicó, las RFV al estar controvertidas pueden ser perfectibles.

Aunado a lo anterior, a efecto de acreditar que los procedimientos llevados a cabo por la CASVISH son procedimientos formalmente administrativos, pero materialmente jurisdiccionales, a continuación, se acredita que concurren los **elementos señalados en el párrafo segundo, numerales 1 y 2 del lineamiento Trigésimo**:

1. En los procedimientos mediante los que se emiten las RFV, la CASVISH actúa frente a un particular a efecto de revisar el correcto pago de las contraprestaciones establecidas en los Contratos, la procedencia de la recuperación de Costos, así como la procedencia del monto de los Activos, mismos que se efectúan con base en la información contenida en el SIPAC, así como, la proporcionada por estos, en términos de las estipulaciones de los Contratos, y de la normatividad aplicable.
2. Las RFV emitidas por la CASVISH cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento previstas en el artículo 14 constitucional, esto es, se notifica el inicio del procedimiento en el cual se señala el objeto del mismo y se requiere información, posteriormente se emiten dos informes (informe parcial y el informe de conclusión) en los cuales se otorgan plazos para que el particular tenga la oportunidad de presentar pruebas y realizar manifestaciones que desvirtúen las inconsistencias detectadas durante la verificación, por lo que de no desvirtuarlas o subsanarlas finalmente se emite una resolución final de verificación.

Por lo anterior, es evidente que se cumple con lo señalado en el numeral 2 del lineamiento Trigésimo ya que se cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, a este respecto sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada bajo el número 200234, Tesis: P./J. 47/95 Novena Época.

**"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.**

La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: **1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.** De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.

Amparo directo en revisión 2961/90. Ópticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.

Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo.





Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de once votos de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juvenito V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco."

Adicional a lo anterior, el artículo 104 de la LGTAIP, prevé lo siguiente:

*"En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:*

**I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;**

**II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y**

**III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio."**

En este sentido, de conformidad con el artículo antes citado, la presente solicitud se motiva con base en las siguientes consideraciones respecto de la fracción I y II, del citado artículo 104, es de señalar que la divulgación de la información solicitada, sin lugar a dudas, representa un riesgo real para el interés público, toda vez que, ocasionaría pérdidas en los ingresos del Estado que se traducirían en dejar de realizar proyectos prioritarios y estratégicos para el país que benefician a la población, tales como obras de infraestructura en educación y salud, y diversos servicios, lo que invariablemente supera el interés público de la difusión

En consecuencia, en cuanto a la fracción III del mismo artículo, dicha limitación, entendiéndose como la reserva, se adecua al principio de proporcionalidad al no afectar la posibilidad de llevar a cabo proyectos prioritarios en beneficio de la sociedad en general, en tal situación resulta ser el medio menos restrictivo para evitar el perjuicio de la divulgación de la información

Finalmente, en cuanto a que la **reserva se lleve a cabo por un período de 5 años**, tiene su sustento en el hecho que, al estar en presencia de medios de solución de controversias, conforme a la normatividad específica de cada uno, sobre todo en los juicios, existen diversas instancias y acciones jurídicas para resolverse en definitiva, lo que puede llevarse hasta 5 años o más.

A continuación, se describe brevemente el contenido general de las RFV:

- Datos personales como son nombre del representante legal
- Denominación social del contratista, así como su domicilio.
- Denominaciones o razones sociales de diversos proveedores de los contratistas auditados.
- Registro Fiduciario otorgado por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
- Montos y conceptos relacionados con la contabilidad de los Contratistas auditados.
- Datos relacionados con documentos de facturación (CFDI's o comprobantes extranjeros).
- Detalle de criterios internos mediante los cuales se evalúa la procedencia o improcedencia de los costos registrados que serán recuperables.
- Elementos de prueba aportados por el contratista a fin de acreditar la procedencia de los costos registrados.

Por lo expuesto, resulta imperativo que la UPINTSH minimice el riesgo de que dicha información pueda ser conocida por una persona ajena a ese derecho, ya que la misma se relaciona de manera directa con la maximización de los ingresos del Estado, derivado de la verificación de los aspectos financieros del pago de las contraprestaciones establecidas en los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos.

De lo anterior, se observa que el presente riesgo se acentúa si se da a conocer la información proporcionada por los Contratistas, así como los criterios empleados por el personal de la CASVISH, para la verificación del correcto pago de las Contraprestaciones establecidas en los contratos para exploración y extracción de hidrocarburos, pues estos datos podrían ser utilizados de manera dolosa en perjuicio del Estado Mexicano y de los propios contratistas, ya que con dicha información las empresas del ramo o sector de hidrocarburos, pueden implementar estrategias o medidas que les permita incrementar la recuperación de costos y en consecuencia se verían afectados los ingresos del Estado Mexicano.





Ahora bien, el perjuicio que supone la divulgación de la información contenida en las RFV, supera el interés público de que ésta se difunda, toda vez que al darse a conocer dicha información se puede comprometer la maximización de los ingresos en favor del Estado Mexicano, disminuyendo con ello los ingresos de la Nación; por ende, es de vital importancia que se otorgue a la misma la condición de reservada.

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, fracción II, 97 primer y último párrafo, 99, segundo párrafo, 110 fracciones VIII y XI de la LFTAIP; 44, fracción II, 101 segundo párrafo, y 113, fracción VIII y XI de la LGTAIP, se solicita que ese Comité tenga a bien confirmar la reserva de las RFV de referencia.

[...]"

Por lo expuesto, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público procede a valorar las manifestaciones vertidas y se pronuncia con base en los siguientes:

## CONSIDERANDOS

**PRIMERO.** El Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver respecto de la inexistencia y clasificación de la información como confidencial y reservada de conformidad con los artículos 43, 44, fracción II, 103, 106 fracción I, 108, último párrafo, 111, 113, fracciones VIII y XI, 114, 116, párrafos primero, tercero y cuarto 137, inciso a) 138, fracción II y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública<sup>1</sup> (LGTAIP) y 64, 65, fracción II, 98, fracción I, 102, 105, último párrafo, 108, 110, fracciones VIII y XI, 111, 113, fracciones I, II y III, 140, fracción I, 141, fracción II y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública<sup>2</sup> (LFTAIP), Cuarto, Quinto, Séptimo, fracción I, Octavo, Noveno, Vigésimo séptimo Trigésimo, Trigésimo Octavo, Cuadragésimo, Cuadragésimo cuarto, y Quincuagésimo sexto de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*<sup>3</sup> (Lineamientos) y su reforma<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> [https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP\\_200521.pdf](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_200521.pdf)

<sup>2</sup> [https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP\\_200521.pdf](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_200521.pdf)

<sup>3</sup> [https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016#gsc.tab=0](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433280&fecha=15/04/2016#gsc.tab=0)

<sup>4</sup> [https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5671860&fecha=18/11/2022&print=true](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5671860&fecha=18/11/2022&print=true)



**SEGUNDO.** Un particular requirió todas y cada una de las resoluciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (incluyendo resoluciones finales de verificación, resoluciones de cierre o cualquier otra emitida en términos de los LINEAMIENTOS para la elaboración y presentación de los costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en los contratos y asignaciones; la verificación contable y financiera de los contratos, y la actualización de regalías en contratos y del derecho de extracción de hidrocarburos) durante los periodos comprendidos entre los años de dos mil quince y dos mil veintidós en ejercicio de sus facultades de verificación, en las cuales determine si: (a) ciertos costos incurridos bajo un contrato de Exploración y/o Extracción ("CEE") son recuperables o no son recuperables; o (b) en general, cualquier otro ajuste a las Contraprestaciones del CEE; o (c) si se determinó que las inconsistencias o conclusiones detectadas en la verificación fueron aclaradas o subsanadas.

En respuesta, la UPINTySH, por conducto de la Coordinación de Análisis, Supervisión y Verificación de Ingresos sobre Hidrocarburos (CASVISH) manifestó que realizó una búsqueda amplia y exhaustiva de la información en los archivos de trámite y de concentración tanto físicos como digitales, y respecto del periodo correspondiente a los años de dos mil quince al dos mil diecisiete no localizó expresión documental alguna que coincida con lo solicitado, toda vez que durante ese período la entonces Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos (UIH) no inició ningún procedimiento de verificación, ya que la unidad aún se encontraba en la etapa normativa para poder llevar a cabo las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (RISHCP).

El seis de marzo de dos mil quince emitió los "LINEAMIENTOS para la elaboración y presentación de los costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en los contratos y asignaciones; la verificación contable y financiera de los contratos, y la actualización de regalías en contratos y del derecho de extracción de hidrocarburos" (Lineamientos) en el cual se contemplan los procedimientos de Verificación y el tiempo máximo de duración de los mismos, estableciendo en el numeral 63 que la duración máxima para realizar una verificación será de veinticuatro meses.



De igual forma, hasta el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se registraron los Manuales de Procedimiento<sup>5</sup>: **1)** Verificación mediante auditoría a través de requerimiento de información de los aspectos contables y financieros de los Contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos; así como, **2)** Verificación mediante auditoría a través de procedimientos analíticos de los ajustes y correcciones al cálculo de las Contraprestaciones y registros contables y financieros solicitados por el Contratista de los Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos.

En virtud de lo anterior, la CASVISH considera aplicable el criterio 14/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), "Inexistencia" y solicita al Comité de Transparencia con base a lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 141, fracción II y 143 de la LFTAIP, así como en los artículos 44, fracción II, 138, fracción II y 139 de la LGTAIP confirme la inexistencia de la información.

Ahora bien, respecto a los años dos mil dieciocho al dos mil veintidós localizaron un total de 82 (ochenta y dos) resoluciones las cuales 77 (setenta y siete) se ponen a disposición en versión pública y 5 (cinco) clasifican como reservadas.

Periodo (año)	No. de resoluciones	Fojas totales por Período
2018	10	180
2019	5	103
2020	8	63
2021	31	567
2022	23	945
<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>1,858</b>

Núm. de oficio de la RFV	Fecha del oficio	No. de Juicio de Nulidad/Amparo	Fracción de Reserva
--------------------------	------------------	---------------------------------	---------------------

<sup>5</sup> [https://www.sipot.hacienda.gob.mx/work/models/SIPOT/Fracciones/Fraccion\\_1/14.pdf](https://www.sipot.hacienda.gob.mx/work/models/SIPOT/Fracciones/Fraccion_1/14.pdf)

1) desde la página 1, 136 y 2) desde la página 1,410





I	352-A-III-044	17 de junio de 2021	Procedimiento Conciliatorio	Fracción VIII
II	352-A-059	21 de febrero de 2022	Procedimiento Conciliatorio	Fracción VIII
III	352-A-III-020	22 de octubre de 2020	JN: 24202/20-17-14-6 y Procedimiento Conciliatorio	Fracciones VIII y XI
IV	352-A-III-021	22 de octubre de 2020	JN: 24351/20-17-11-4	Fracción XI
V	352-A-III-043	22 de marzo de 2021	JA: 443/2021	Fracción XI

Asimismo, de la información contenida en cada una de las resoluciones, se observa que cuentan con información de carácter confidencial como lo es **nombre de persona física, domicilio de persona física, firma autógrafa de persona física, folio fiscal, nombre de proveedores, RFC, volúmenes de producción, volúmenes, precios de comercialización, valor contractual de los hidrocarburos, montos correspondientes al cálculo de las contraprestaciones, costos, gastos e inversiones que haya proporcionado el contratista así como los recuperables, políticas contables, administrativas, económicas y jurídicas, información relativa a control interno, contractual, contable y de tecnologías de la información, información relativa de proveedores, transferencias e información financiera** por lo que de conformidad con lo señalado en los artículos 116, párrafos primero, tercero y cuarto de la LGTAIP y 113, fracciones I, II y III de la LFTAIP se elaborará versión pública de esas resoluciones.

Por otra parte, la unidad administrativa señala que las setenta y siete resoluciones se encuentran en formato físico, por lo que la información se encuentra disponible en las siguientes modalidades, previo pago de los derechos:

- Copia simple
- Copia certificada
- Consulta “in situ”. en un horario de 10: 00 a 15:00 horas, para lo que se solicita ponerse en contacto con la Unidad de Transparencia con correo electrónico [unidadtransparencia@hacienda.gob.mx](mailto:unidadtransparencia@hacienda.gob.mx) y teléfono 5536885814, con la finalidad de concretar la cita.



Asimismo, y en caso de requerir que la información se envíe por correo certificado al domicilio, se deberá cubrir una cuota adicional la cual dependerá del peso y lugar donde sea enviado.

Acerca de la reserva de las cinco resoluciones la CASVISH, de conformidad con los artículos 106, fracción I; 108, último párrafo; artículo 113, fracciones VIII y XI de la LGTAIP y 98 fracción I, 105 último párrafo, y 110, fracciones VIII y XI de la LFTAIP, solicita a este Comité de Transparencia confirme la reserva de las mismas.

**TERCERO.** Del análisis de las constancias que obran en el expediente, se desprende que la CASVISH, adscrita a la UPINTySH de la SSHCP manifestó lo siguiente:

### **INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN.**

La unidad administrativa remitió a este órgano colegiado un informe en el que expone las razones por las cuales declaró la inexistencia de lo requerido del periodo de dos mil quince al dos mil diecisiete, ya que después de realizar la búsqueda exhaustiva y con criterio amplio de la información, no localizó expresión documental alguna que coincidiera con lo solicitado, ya que durante el periodo de dos mil quine al dos mil dieciocho no inició ningún procedimiento de verificación, toda vez que la unidad aún se encontraba en la etapa normativa para poder llevar a cabo las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En ese sentido, se procederá a analizar la inexistencia de la información conforme a la siguiente normatividad.

Los artículos 20, 43, 44, fracción II, 138 fracción II y 139 de la LGTAIP establecen:

***"Artículo 20.** Ante la negativa del acceso a la información o su **inexistencia**, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones."*



**“Artículo 43.** En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar.

*El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.*

*Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.*

*Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.*

*El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Fiscalía correspondiente o la Unidad especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente artículo, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa.*

*La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a los protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello...”.*

**“Artículo 44.** Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

...

*II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados.”*

**“Artículo 138.** Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia:

...

*II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento...”.*







*“**Artículo 139.** La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma.”*

Los artículos 13, 64, 65, fracción II, 141 fracción II y 143 de la LFTAIP refieren:

*“**Artículo 13.** Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen a los sujetos obligados.*

*En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe fundar y motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia.”*

*“**Artículo 64.** En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar, designado por el titular u órgano colegiado supremo, según se trate.*

*El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz, pero no voto.*

*Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. Los miembros propietarios de los Comités de Transparencia contarán con los suplentes designados de conformidad con la normatividad interna de los respectivos sujetos obligados, y deberán corresponder a personas que ocupen cargos de la jerarquía inmediata inferior a la de dichos propietarios.*

*En el caso de la Administración Pública Federal, los Comités de las dependencias y entidades se integrarán de la siguiente forma:*

- I. El responsable del área coordinadora de archivos o equivalente;*
- II. El titular de la Unidad de Transparencia, y*
- III. El titular del Órgano Interno de Control de cada dependencia o entidad.*

*Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación, conforme a la*



*normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.*

*El Centro Nacional de Inteligencia; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; las Divisiones de Inteligencia e Investigación de la Policía Federal; la Fiscalía correspondiente o la Unidad Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente artículo, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa.*

*La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la Ley General, esta Ley y a los protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello...”.*

**“Artículo 65.** Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes:

...

**II.** Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y **declaración de inexistencia** o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados...”.

**“Artículo 141.** Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, será aplicable para el Comité de Transparencia el procedimiento previsto en el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley General, y lo establecido en este artículo:

...

**II.** Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento...”.

**“Artículo 143.** La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, y señalará al servidor público responsable de contar con la misma.”

Asimismo, el numeral Vigésimo séptimo de los Lineamientos, señala:



*"Vigésimo séptimo. En el caso de que el área determine que la información solicitada no se encuentra en sus archivos, ya sea por una cuestión de **inexistencia** o de incompetencia que no sea notoria, deberá notificarlo al Comité de Transparencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes en que haya recibido la solicitud por parte de la Unidad de Transparencia, y acompañará un informe en el que se expongan los criterios de búsqueda utilizados para su localización, así como la orientación correspondiente sobre su posible ubicación."*

De la normatividad referida se advierte que la información debe existir en los archivos del sujeto obligado si esta se refiere a facultades, competencias y funciones que tenga conferidas, por lo que sus áreas adscritas deben realizar la búsqueda de la información y comunicar el resultado de la misma y, para el caso de no localizar expresión documental alguna, se debe enviar un informe al Comité de Transparencia en el que se expongan los criterios utilizados para su localización, a efecto de que se analice el caso y se expida una resolución en la que confirme, modifique o revoque tal determinación.

Para cumplir con lo anterior, la CASVISH informó que realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y digitales a su resguardo, sin que se haya encontrado expresión documental o información solicitada del periodo de dos mil quince al dos mil diecisiete.

A fin de resolver lo conducente, cabe señalar que los artículos 17, fracción XLV y 17 D, fracciones XII y XVII, del RISHCP establecen:

**"Artículo 17.-** La Unidad de Política de Ingresos no Tributarios y sobre Hidrocarburos tiene las atribuciones siguientes:

.....

**XLV.** Ejercer las atribuciones que correspondan a la Secretaría en materia de verificación de los aspectos financieros del pago de las contraprestaciones que correspondan al Estado y al contratista derivado de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos a que se refieren la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, así como de las operaciones y registros contables derivados de dichos contratos, conforme a lo que establece la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, el contrato respectivo, los lineamientos que al efecto emita la Secretaría y demás disposiciones jurídicas aplicables;

**"Artículo 17 D.-** La Coordinación de Análisis, Supervisión y Verificación de Ingresos sobre Hidrocarburos tiene las atribuciones siguientes:

...







*XII. Realizar, de acuerdo con las instrucciones de la persona titular de la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios y sobre Hidrocarburos, las atribuciones que correspondan a la Secretaría en materia de verificación de los aspectos financieros del pago de las contraprestaciones que correspondan al Estado y al contratista derivado de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos a que se refieren la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, así como de las operaciones y registros contables derivados de dichos contratos, mediante la revisión de los registros de información con que se cuente, o de solicitudes de información que realice a los contratistas, partes relacionadas y a terceros, o bien, de visitas o auditorías, conforme a lo que establece la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, el contrato respectivo, los lineamientos que al efecto emita la Secretaría y demás disposiciones jurídicas aplicables;*

...

*XVII. Determinar los ajustes y correcciones que correspondan a las contraprestaciones establecidas en los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos a que se refieren la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que deriven de las verificaciones;"*

De lo anterior, se advierte que la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios y sobre Hidrocarburos a través de la Coordinación de Análisis, tiene las atribuciones que corresponden a la secretaría en materia de verificación de los aspectos financieros del pago de las contraprestaciones que correspondan al Estado y al contratista derivado de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos así como de las operaciones y registros contables derivados de dichos contratos, mediante la revisión de los registros de información con que se cuente, o de solicitudes de información que realice a los contratistas, partes relacionadas y a terceros, o bien, de visitas o auditorías.

Considerando lo anterior, es posible determinar que se cumplió con el procedimiento de búsqueda previsto en la LFTAIP en razón de que se turnó la solicitud a la unidad administrativa que cuenta con atribuciones para conocer lo solicitado, no obstante, manifestó que de dos mil quince al dos mil diecisiete no localizó expresión documental que atienda lo requerido, toda vez que durante ese periodo aún se encontraba en la etapa normativa para poder llevar a cabo las atribuciones conferidas en el RISHCP.





Por lo expuesto, este Comité de Transparencia considera que se actualizan los criterios de interpretación SO/14/2017 y SO/04/2019 emitidos por el Pleno del INAI, que señalan lo siguiente:

***"Inexistencia.*** La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información solicitada e implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, no obstante que cuenta con facultades para poseerla."

***"Propósito de la declaración formal de inexistencia.*** El propósito de que los Comités de Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal de inexistencia, debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado."

De los criterios citados, se desprende que la inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información solicitada que implica que no se encuentra en poder del sujeto obligado, y que el propósito de la declaración formal de inexistencia es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés y generar la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda realizada.

## **ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN CONFIDENCIAL ARTÍCULO 113, FRACCIÓN I DE LA LFTAIP.**

De las manifestaciones realizadas por la CASVISH, se desprende que solicita la clasificación como confidencial de los datos relativos a: **nombre, domicilio, firma de personas físicas, folio fiscal, nombre de proveedores, RFC, concepto que avala la emisión del mismo y montos** contenidos en las resoluciones, lo anterior, por actualizar la causal de clasificación prevista en los artículos 116, primer párrafo de la LGTAIP, 113, fracción I de la LFTAIP y Trigésimo octavo, fracción I, numeral 1 de los Lineamientos.

Por lo anterior, este Comité procederá a analizar la clasificación de la información como confidencial, de acuerdo con los siguientes preceptos: Debe tenerse en cuenta que, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra regulado el derecho a la vida privada, entendida como el límite a la intromisión del Estado en el ámbito de la



persona, de conformidad con los artículos 6 y 16 de la citada Constitución, los cuales establecen lo siguiente:

**“Artículo 6o.**

...

*Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.*

...

**A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información**, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, **se regirán por** los siguientes **principios y bases**:

...

**II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.**

...

**Artículo 16.**

...

*Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros...”.*

De los artículos en cita se desprende que la información referente al ámbito privado de las personas, así como los datos personales, deben estar protegidos en los términos y con las excepciones a los principios de tratamiento de datos que por razones de orden público fije la ley, por lo que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. Por lo anterior, los sujetos obligados están constreñidos a permitir el acceso a la información con que cuentan, así como a la protección y resguardo de los datos personales que obran en su poder.

Los artículos 43, 44, fracción II, 103, 106, 111, 116, primer párrafo y 137 de la LGTAIP disponen lo siguiente:

**Artículo 43.** *En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar.*

*El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.*





*Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.*

*Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información...”.*

**“Artículo 44.** Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

...

**II. Confirmar,** modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, **clasificación de la información** y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;”

...

**“Artículo 103.** En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión...”.

**“Artículo 106.** La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

*I. Se reciba una solicitud de acceso a la información...”.*

**“Artículo 111.** Cuando un **Documento** contenga partes o secciones reservadas o **confidenciales**, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, **deberán elaborar una Versión Pública** en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y **fundando y motivando su clasificación.**”

**Artículo 116.** Se considera **información confidencial** la que contiene **datos personales** concernientes a una persona identificada o identificable. ... Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

...

**Artículo 137.** En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que



*deberá resolver para: a) Confirmar la clasificación; b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 132 de la presente Ley...”.*

Por su parte, los artículos 16, 64, 65, fracción II, 98, fracción I, 102, 108, 113, fracción I, 113 fracción I 118 y 140, fracción I de la LFTAIP, señalan:

**“Artículo 16.** Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, deberán cumplir, con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia y en la Ley General.”

**“Artículo 64.** En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar, designado por el titular u órgano colegiado supremo, según se trate.

...

*Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.*

**“Artículo 65.** Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes:

...

**II.** Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados...”.

**“Artículo 98.** La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

*I. Se reciba una solicitud de acceso a la información...”.*

**“Artículo 102.** En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. Para motivar la confirmación de la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. Tratándose de aquella información que



actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.”

**Artículo 108.** Cuando un **documento** contenga partes o secciones reservadas o **confidenciales**, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una **Versión Pública** en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y **fundando y motivando su clasificación**.

...

**Artículo 113.** Se considera información **confidencial**:

**I.** La que contiene **datos personales** concernientes a una persona física identificada o identificable;

...

La **información confidencial no estará sujeta a temporalidad** alguna y sólo podrá tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

...

**Artículo 118.** Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados a través de sus áreas, para efectos de atender una solicitud de información, **deberán elaborar una versión pública** en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación, en términos de lo que determine el Sistema Nacional.

...

**Artículo 140.** En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información requerida deban ser clasificados, **deberá seguirse el procedimiento previsto en el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley General**, atendiendo además a las siguientes disposiciones:

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:

**I. Confirmar** la clasificación...”.

Por otra parte, los numerales Cuarto, Quinto, Séptimo, fracción I, Octavo, Noveno, Trigésimo octavo, fracción I, numeral 1, de los Lineamientos, establecen lo siguiente:

**“Cuarto.** Para **clasificar la información como** reservada o **confidencial**, de manera total o **parcial**, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General.





*Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.*

**Quinto.** *La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General, la Ley Federal y leyes estatales, corresponderá a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al momento en que generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás disposiciones aplicables en la materia.*

...  
**Séptimo.** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

**I.** *Se reciba una solicitud de acceso a la información;"*

...  
**Octavo.** *Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.*

*Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.*

*En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación deberá comprender el análisis de la prueba de daño a que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, en relación con el artículo trigésimo tercero de los presentes lineamientos, así como las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva."*

**Noveno.** *En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o secciones clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una **versión pública fundando y motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen**, siguiendo los procedimientos establecidos en el Capítulo IX de los presentes lineamientos.*

...  
**Trigésimo octavo.** *Se considera susceptible de clasificarse como información confidencial:*



*1. Los datos personales, entendidos como cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, en términos de la norma aplicable que, de manera enunciativa más no limitativa, se pueden identificar de acuerdo a las siguientes categorías:*

**1. Datos identificativos:** *El nombre, alias, pseudónimo, domicilio, código postal, teléfono particular, sexo, estado civil, teléfono celular, firma, clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Clave de Elector, Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, localidad y sección electoral, y análogos."*

*6. Datos patrimoniales: Bienes muebles e inmuebles de su propiedad, información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas, inversiones, seguros, fianzas, servicios contratados, referencias personales, beneficiarios, dependientes económicos, decisiones patrimoniales y análogos."*

Con base en la normatividad señalada, se considera información confidencial la que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, cuya difusión incide en su esfera personal, misma que no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.

Para que dicha información se clasifique con ese carácter, es necesario atender lo dispuesto en los artículos 116 primer párrafo de la LGTAIP y 113, fracción I, de la LFTAIP, en relación con el Trigésimo octavo de los Lineamientos, que señalan en síntesis lo siguiente:

- Que se trate de datos personales.
  - a) Información concerniente a una persona, y
  - b) Que ésta sea identificada o identificable.

Es importante mencionar que la normativa establece que los datos personales se refieren a cualquier información concerniente a una persona física que la pueda hacer identificada o identificable.

De tal manera que dicha información puede estar expresada en forma numérica, alfabética, gráfica, alfanumérica, fotográfica, acústica o de



cualquier otro formato, por tanto, una persona puede ser identificable cuando su identidad se expone de manera directa o indirectamente a través de cualquier información.

Bajo ese contexto, el término “cualquier información” que permita identificar o hacer identificable a una persona física constituye un dato personal, en ese sentido, dicho término señalado en la normatividad obliga a realizar una amplia interpretación de la naturaleza o del contenido de la información y de su soporte técnico, previendo que pueda considerarse como dato personal.

Otro aspecto relevante a destacar es el término “concerniente”, el cual permite determinar el alcance de la información que deba considerarse como datos personales, por tanto, cuando la información se refiere o versa sobre una persona física, cuando dicha información propicie la intención de evaluar, tratar o influir en la situación o comportamiento de una persona física y que dicha información repercute en los derechos e intereses de una determinada persona y por consecuencia de la revelación de la información el titular de los datos personales pueda ser tratado de forma diferente por otras personas, por lo cual se puede concluir que a la información debe dársele el tratamiento de datos personales.

Bajo ese contexto, se advierte que cualquier información que revele de manera enunciativa más no limitativa, la situación o identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social, ya sea de manera directa o indirecta de una persona, debe protegerse por el responsable y/o sujeto obligado.

Robustece lo anterior la tesis aislada número P. II/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, enero de 2020, Tomo I, página 561, de la Décima Época, materia constitucional y administrativa, que refiere la relación entre el derecho a la información y sus límites, en cuanto se fundamentan en otros bienes constitucionalmente tutelados:

**“DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA RELACIÓN CON SUS LÍMITES CONSTITUCIONALES NO DEBE PLANTEARSE EN TÉRMINOS ABSOLUTOS.** La clasificación de la información como reservada corresponde al desarrollo del límite previsto en el artículo 6o. constitucional referente a la protección del interés público, mientras que





*la categoría de información confidencial responde a la necesidad de proteger la vida privada de las personas y sus datos personales. Desde esta perspectiva, resulta necesario entender que la relación entre el derecho a la información y sus límites, en cuanto se fundamentan en otros bienes constitucionalmente tutelados, no se da en términos absolutos de todo o nada, sino que su interacción es de carácter ponderativo, en la medida en que la natural tensión que pueda existir entre ellos, requiere en su aplicación un equilibrio necesario entre el ejercicio efectivo del derecho a la información y la indebida afectación de otro tipo de bienes y valores constitucionales que están instituidos también en beneficio de las personas. Es por ello que si se reconoce que ningún derecho humano tiene el carácter de absoluto, entonces debe igualmente reconocerse que ninguno de sus límites puede plantearse en dichos términos, por lo que la relación entre ambos extremos debe plantearse en los mismos términos de equilibrio."*

Consecuentemente, se procede a analizar si lo manifestado por la CASVISH actualiza alguna excepción al derecho de acceso a la información expresamente prevista en la Ley para garantizar la protección de la información confidencial ya referida.

De lo anterior, se desprende que los datos personales localizados en las resoluciones fueron: nombre, domicilio y firma de personas físicas.

Al respecto, conviene precisar lo siguiente:

### **Nombre de personas físicas.**

El nombre es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a una persona física identificada e identificable; por tanto, se considera un dato personal confidencial.

### **Domicilio de personas físicas**

El lugar en donde reside una persona física, constituye un dato personal confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podrá afectar su esfera privada. En consecuencia, tal dato personal no se encuentra bajo escrutinio público.

### **Firma de personas físicas**

La firma es un dato personal confidencial, en tanto que identifica o hace identificable a su Titular, además aún y cuanto se trata de un servidor público, dicha firma no fue plasmada en el ejercicio de sus atribuciones como persona servidora pública. Se considerará como confidencial siempre y cuando no sea emitido a través de un acto de autoridad o se entreguen recursos públicos.

De lo expuesto, es dable concluir que el dato relativo a nombre de personas físicas, domicilio de personas físicas, firma de personas físicas, de setenta y siete resoluciones constante de mil ochocientas cincuenta y ocho fojas útiles actualizan la causal de clasificación establecida en los artículos 116, párrafo primero de la LGTAIP y 113, fracción I de la LFTAIP, en correlación con el numeral Trigésimo octavo, fracción I, numeral 1 de los Lineamientos.

De tal forma, que se está ante una excepción al derecho de acceso a la información expresamente prevista en la ley para garantizar la protección de la información confidencial ya referida, en virtud de que como se refirió el derecho de acceso a la información no reviste una naturaleza absoluta, sino que está sujeto a límites establecidos en otros supuestos fundados y constitucionalmente tutelados, como en el caso que nos ocupa, de ahí la obligación de los sujetos obligados a proteger los datos personales y la información de naturaleza confidencial.

### **ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN CONFIDENCIAL ARTÍCULO 113 FRACCIÓN II DE LA LFTAIP.**

De lo manifestado por la CASVISH, se desprende que pone a disposición la versión pública previo pago de los derechos de setenta y siete **resoluciones** de dos mil dieciocho al dos mil veintidós consistente en mil ochocientas cincuenta y ocho fojas útiles, toda vez que contiene información concerniente a **volúmenes de producción, volúmenes y precios de comercialización, valor contractual de los hidrocarburos montos correspondientes al cálculo de las contraprestaciones, costos, gastos, inversiones del contratista, e inversiones recuperables por el contratista e información relativa proveedores y transferencias** mismo que podría actualizar la causal de procedencia prevista en los artículos 116, párrafo segundo de la LGTAIP, 113, fracción II de la LFTAIP y Trigésimo octavo, fracción III.



Por lo anterior, este Comité procederá a analizar la clasificación de la información como confidencial de los datos referidos, de acuerdo a los siguientes preceptos:

Debe tenerse en cuenta que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos regulado el derecho a la vida privada, entendida como el límite a la intromisión del Estado en el ámbito de la persona:

**"Artículo 6o.**

...

*Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.*

...

**A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se registrarán por los siguientes principios y bases:**

...

**II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.**

...

**Artículo 16.**

...

*Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.*



...”

De los artículos en cita, se desprende que la información que se refiere al ámbito privado de las personas, así como los datos personales, deben estar protegidos en los términos y con las excepciones a los principios de tratamiento de datos que por razones de orden público fije la ley, por lo que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales.

Por lo anterior, los sujetos obligados están constreñidos a permitir el acceso a la información con que cuentan, así como a la protección y resguardo de los datos personales que obran en su poder.

Los artículos 44, fracción II, III, 116, párrafo tercero y 137 inciso a) de la LGTAIP:

**Artículo 44.** *Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:*

...

**II. Confirmar,** *modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, **clasificación de la información** y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;*

...

**Artículo 111.** *Cuando un **Documento** contenga partes o secciones reservadas o **confidenciales**, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, **deberán elaborar una Versión Pública** en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y **fundando y motivando su clasificación.***

...

**Artículo 116.”** *Se considera información confidencial...*

...

*“Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad*



*corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos público”*

**Artículo 137.** *En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:*

*a) Confirmar la clasificación;*

*...”*

Artículos 65, fracción II, 98, fracción III, 106, 108, 113, fracción I, y 140, fracción I de la LFTAIP:

**Artículo 65.** *Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes:*

*...*

**II.** *Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;*

*...*

**Artículo 108.** *Cuando un **documento** contenga partes o secciones reservadas o **confidenciales**, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una **Versión Pública** en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y **fundando y motivando su clasificación.**”*

*...*

**Artículo 113.** *Se considera información **confidencial**:*

II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, **comercial**, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y...





*La **información confidencial no estará sujeta a temporalidad** alguna y sólo podrá tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.*

...

**Artículo 140.** *En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información requerida deban ser clasificados, **deberá seguirse el procedimiento previsto en el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley General**, atendiendo además a las siguientes disposiciones:*

*El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:*

**I. Confirmar** la clasificación.

*[...]"*

Por otra parte, los numerales Cuarto, Noveno y Cuadragésimo cuarto, Trigésimo octavo, cuadragésimo octavo y Quincuagésimo sexto de los Lineamientos, establecen lo siguiente:

**"Cuarto.** Para **clasificar la información como** reservada o **confidencial**, de manera total o **parcial**, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General.

*Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia."*

...

**Noveno.** *En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o secciones clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una **versión pública fundando y motivando la clasificación de***





*las partes o secciones que se testen, siguiendo los procedimientos establecidos en el Capítulo IX de los presentes lineamientos.”*

**“Cuadragésimo cuarto.** De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar la información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes:

*I. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial;*

*II. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para preservarla;*

*III. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, y*

*IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.”*

**“Trigésimo octavo.** Se considera información confidencial:

...

*III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, **comercial**, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.*

*La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.”*

**Cuadragésimo Octavo.** Los documentos y expedientes clasificados como confidenciales sólo podrán ser comunicados a terceros siempre y cuando exista disposición legal expresa que lo justifique o cuando se cuente con el consentimiento del titular.

*Cuando un sujeto obligado reciba una solicitud de acceso a información confidencial por parte de un tercero, el Comité de Transparencia, podrá en caso de que ello sea posible, requerir al particular titular de la misma autorización para entregarla, conforme a los plazos establecidos en la*





*normativa aplicable para tal efecto. El silencio del particular será considerado como una negativa.*

*No será necesario el consentimiento en los casos y términos previstos en el artículo 120 de la Ley General.*

**Quincuagésimo sexto.** *La versión pública del documento o expediente que contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia.*

...

Con base a la normatividad señalada, el secreto bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o sujetos obligados, es considerada como información confidencial, siempre que no involucre recursos públicos. De igual forma, se destaca que la información confidencial no está sujeta a una temporalidad, pero limita su acceso únicamente a los titulares de la misma, sus representantes legales y servidores públicos.

Derivado de lo anterior, este Comité de Transparencia considera que se está ante una excepción al derecho de acceso a la información expresamente prevista en la Ley, determinando la procedencia de la versión pública para atender lo requerido por el particular y al mismo tiempo garantizar la protección de la información confidencial ya referida, en virtud de que el derecho de acceso a la información no reviste una naturaleza absoluta, sino que está sujeto a límites establecidos en otros supuestos fundados y constitucionalmente tutelados, como en el caso que nos ocupa; de ahí la obligación de los sujetos obligados a proteger los datos personales y la información de naturaleza confidencial.

Robustece lo anterior, la tesis aislada número P. II/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, enero de 2020, Tomo I, página 561, de la Décima Época, materia constitucional y administrativa, que refiere la relación entre el derecho a la información y sus límites, en cuanto se fundamentan en otros bienes constitucionalmente tutelados:



**DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA RELACIÓN CON SUS LÍMITES CONSTITUCIONALES NO DEBE PLANTEARSE EN TÉRMINOS ABSOLUTOS.**

*La clasificación de la información como reservada corresponde al desarrollo del límite previsto en el artículo 6o. constitucional referente a la protección del interés público, mientras que la categoría de información confidencial responde a la necesidad de proteger la vida privada de las personas y sus datos personales. Desde esta perspectiva, resulta necesario entender que la relación entre el derecho a la información y sus límites, en cuanto se fundamentan en otros bienes constitucionalmente tutelados, no se da en términos absolutos de todo o nada, sino que su interacción es de carácter ponderativo, en la medida en que la natural tensión que pueda existir entre ellos, requiere en su aplicación un equilibrio necesario entre el ejercicio efectivo del derecho a la información y la indebida afectación de otro tipo de bienes y valores constitucionales que están instituidos también en beneficio de las personas. Es por ello que si se reconoce que ningún derecho humano tiene el carácter de absoluto, entonces debe igualmente reconocerse que ninguno de sus límites puede plantearse en dichos términos, por lo que la relación entre ambos extremos debe plantearse en los mismos términos de equilibrio.*

PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Tesis: I.10o.A.79 A (10a.)

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Décima Época 2018460 10 de 88

Tribunales Colegiados de Circuito

Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III

Pag. 2318

Tesis Aislada (Administrativa)."

Consecuentemente, se procede a realizar el análisis de los datos personales concernientes en volúmenes de producción, volúmenes y precios de comercialización, montos correspondientes al cálculo de las contraprestaciones, costos, gastos, inversiones del contratista, inversiones recuperables por el contratista e información relativa proveedores y transferencias contenidos en las resoluciones del año dos mil dieciocho al dos mil veintidós referidos por la CASVISH:





**I. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial;**

Se hace del conocimiento que la información relativa a volúmenes de producción proporcionados o registrados en el SIPAC por el Contratista, volúmenes y precios de comercialización, al valor contractual de los Hidrocarburos, a los montos correspondientes al cálculo de las contraprestaciones, costos, gastos e inversiones considerados recuperables e información relativa proveedores y transferencias contiene información derivada de las actividades comerciales en materia de Hidrocarburos de las empresas titulares de un Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos.

**II. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para preservarla;**

La información se resguarda con carácter de confidencial en el archivo de trámite de la unidad administrativa, siendo restringido el acceso a la misma, toda vez que únicamente puede ser consultada por el personal responsable de llevar a cabo las labores de verificación, en consecuencia, dicha información no se puede localizar en un repositorio público.

**III. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, y**

La información significa para su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, ya que contiene datos referentes a su situación financiera y contable relativa a sus activos, pasivos y capital que conforman su patrimonio, dado que con la valoración de la citada información se determinan los montos de las contraprestaciones que el particular debe recibir, o pagar al estado, o bien, los costos que le serán recuperados, lo que le representa un valor competitivo en el mercado que, de hacerse del dominio público, en cualquier tiempo, afectaría el desarrollo y estabilidad de la empresa y la sana competencia en el sector de hidrocarburos.

**IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con base en la información**





**previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.**

El artículo 58 fracciones I, inciso a) y g, y VI, inciso a) de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos prevé que el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deben publicar diversa información de manera mensual y por medios electrónicos, dentro de los cuales se contemplan los siguientes conceptos a: los volúmenes de producción proporcionados o reportados en SIPAC por la CNH, los precios contractuales de los Hidrocarburos, así como los conceptos y montos correspondientes a los costos y gastos improcedentes; con lo anterior se demuestra que los conceptos enlistados en el numeral 1 antes señalados, no deben divulgarse por disposición legal al no contemplarse en el citado artículo.

Derivado de lo anterior, es dable concluir que los datos relativos a volúmenes de producción, volúmenes y precios de comercialización, montos correspondientes al cálculo de las contraprestaciones, costos, gastos, inversiones del contratista, inversiones recuperables por el contratista e información relativa proveedores y transferencias actualizan la causal de clasificación establecida en los artículos 116, párrafo tercero, de la LGTAIP; 113, fracción II, de la LFTAIP, en correlación con los numerales Cuarto y Cuadragésimo cuarto, de los Lineamientos, toda vez que no se puede proporcionar información sin el consentimiento de su titular o representante legal.

### **ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN CONFIDENCIAL ARTÍCULO 113, FRACCIÓN III DE LA LFTAIP.**

De las constancias que integran el expediente de la solicitud de mérito, se advierte que la CASVISH determinó que pone a disposición la versión pública previo pago de los derechos de setenta y siete **resoluciones** de dos mil dieciocho al dos mil veintidós constantes en mil ochocientas cincuenta y ocho fojas útiles, toda vez que contiene información concerniente a **información contenida en CFDI's, información proporcionada por el Contratista, información correspondiente a políticas contables, administrativas, económicas y jurídicas,**





**información relativa a control interno, contractual, contable y de tecnologías de la información e información financiera.**

Por lo anterior, este Comité procederá a analizar la clasificación referida, de acuerdo a los siguientes preceptos:

Debe tenerse en cuenta que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos regulado el derecho a la vida privada, entendida como el límite a la intromisión del Estado en el ámbito de la persona:

**“Artículo 6o.**

...  
*Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.*

...  
**A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información**, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, **se regirán por** los siguientes **principios y bases**:

...  
**II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.”**

**“Artículo 16.**

...  
*Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.”*

Los artículos 43, 44, fracción II, 103, 106, fracción I y 116, cuarto párrafo y 137 inciso a) de la LGTAIP, establecen lo siguiente:

**“Artículo 43.** En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar.

*El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.*



*Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.*

*Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.*

*El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Fiscalía correspondiente o la Unidad especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente artículo, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa.*

*La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a los protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello"*

**Artículo 44.** *Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:*

...

**II.** *Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados..."*

...

**"Artículo 103.** *En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.*

*Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular*



*se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.”*

...

**Artículo 106.** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

**I.** *Se reciba una solicitud de acceso a la información*

**Artículo 116.** *Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.*

...

*Asimismo, será información **confidencial** aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales...”*

**Artículo 137.** *En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:*

*a) Confirmar la clasificación;*

...”

Los artículos 64, 65, fracción II, 98 fracción I, 102, 113, fracción III y 140, fracción I de la LFTAIP, señalan lo siguiente:

**“Artículo 64.** *En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar, designado por el titular u órgano colegiado supremo, según se trate.*

*El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz, pero no voto.*

*Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al*





*subordinado. Los miembros propietarios de los Comités de Transparencia contarán con los suplentes designados de conformidad con la normatividad interna de los respectivos sujetos obligados, y deberán corresponder a personas que ocupen cargos de la jerarquía inmediata inferior a la de dichos propietarios.*

*En el caso de la Administración Pública Federal, los Comités de las dependencias y entidades se integrarán de la siguiente forma:*

- I. El responsable del área coordinadora de archivos o equivalente;*
- II. El titular de la Unidad de Transparencia, y*
- III. El titular del Órgano Interno de Control de cada dependencia o entidad.*

*Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.*

*El Centro Nacional de Inteligencia; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; las Divisiones de Inteligencia e Investigación de la Policía Federal; la Fiscalía correspondiente o la Unidad Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente artículo, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa.*

*La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la Ley General, esta Ley y a los protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello”*

**Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes:**

*...*

- II.** *Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados...”.*

**Artículo 98.** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*



*I. Se reciba una solicitud de acceso a la información*

...

**Artículo 102.** *En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.*

*Para motivar la confirmación de la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.*

*Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva*

**Artículo 113.** *Se considera **información confidencial**:*

...

**III.** *Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.*

*La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrá tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello."*

...

**"Artículo 140.** *En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información requerida deban ser clasificados, deberá seguirse el procedimiento previsto en el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley General, atendiendo además a las siguientes disposiciones:*

*El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:*

**I.** *Confirmar la clasificación..."*

Por otra parte, los numerales Cuarto, Quinto, Séptimo, fracción I, Octavo, Trigésimo octavo, fracción II y Cuadragésimo de los Lineamientos, establecen lo siguiente:

**"Cuarto.** *Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender*





*lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General.*

*Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.*

...

**Quinto.** *La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General, la Ley Federal y leyes estatales, corresponderá a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al momento en que generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás disposiciones aplicables en la materia.*

**Séptimo.** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

**I.** *Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

**Octavo.** *Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.*

*Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación también deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva.*

*Tratándose de información clasificada como confidencial respecto de la cual se haya determinado su conservación permanente por tener valor histórico, ésta conservará tal carácter de conformidad con la normativa aplicable en materia de archivos.*

*Los documentos contenidos en los archivos históricos y los identificados como históricos confidenciales no serán susceptibles de clasificación como reservados.*

**“Trigésimo octavo.** *Se considera susceptible de clasificarse como información confidencial:*

...



*II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; y.*

*La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.*

**Cuadragésimo.** *En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar la información por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:*

*I. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y*

*II. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor, por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea”*

De lo anterior, se desprende que se considera información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa la información solicitada da cuenta de una situación específica que puede corresponder a la esfera privada de una persona moral, ya que la información revelaría si está sujeta o no a investigaciones y/o denuncias, lo cual incide en el honor e imagen.

Para clasificar la información como confidencialidad bajo el supuesto previsto en las causales referidas, no es suficiente que los particulares hayan entregado la información con ese carácter, ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la misma y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y





motivar la confidencialidad. Por consiguiente, la información que podrá actualizar este supuesto, entre otras, es la siguiente:

- 1) La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y
- 2) La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor, por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea.

Bajo esa óptica, se trae a colación la tesis aislada P. II/2014, emitida en la décima época, por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en febrero de 2014, cuyo texto refiere lo siguiente:

***“PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. El artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la protección de datos personales, consistente en el control de cada individuo sobre el acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida privada de las personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales podría entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las personas morales, comprenden aquellos documentos e información que les son inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, independientemente de que, en materia de transparencia e información pública, opere el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido, pues, acorde con el artículo 6o., en relación con el 16, párrafo segundo, constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de las personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener datos que pudieran equipararse a los personales, o***



*bien, reservada temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente.”*

De lo anterior, se desprende que el derecho a la protección de datos personales podría entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo.

Ahora bien, para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial de personas morales, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, excepto cuando i) la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público, ii) por ley tenga el carácter de pública, iii) exista una orden judicial, iv) por razones de seguridad nacional y salubridad general o v) para proteger los derechos de terceros o cuando se transmita entre sujetos obligados en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales.

En relación con el pronunciamiento de la CASVICH, se trae a colación la tesis aislada número 2a. LXIII/2008, emitida por la Segunda Sala de la SCJN, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, de mayo de 2008, página 229, de la Novena Época, materia constitucional, misma que a la letra señala:

***“DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD. ESTÁ PROTEGIDO POR EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.***

*Dicho numeral establece, en general, la garantía de seguridad jurídica de todo gobernado a no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad primordial es el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para las autoridades. En un sentido amplio, la referida garantía puede extenderse a*



*una protección que va más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que se desenvuelve normalmente la privacidad o la intimidad, de lo cual deriva el reconocimiento en el artículo 16, primer párrafo, constitucional, de un derecho a la intimidad o vida privada de los gobernados que abarca las intromisiones o molestias que por cualquier medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de la vida.*  
..."

Como se observa, los individuos cuentan con una garantía de seguridad jurídica, que los protege de no ser molestados en su persona, familia, papeles o posesiones, salvo cuando medie mandato de autoridad competente, debidamente fundado y motivado; de esta forma, la vida privada personal y familiar debe quedar excluida del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante prevista en la CPEUM. Es así que, dar a conocer la información contenida en CFDI's, información proporcionada por el contratista, información correspondiente a políticas contables, administrativas, económicas y jurídicas, información relativa a control interno, contractual, contable y de tecnologías de la información e información financiera contenidas en setenta y siete resoluciones constituye información confidencial que afecta su esfera privada y que vulnera la protección de su intimidad y honor, ya que podría generar un juicio o percepción negativa, respecto de hechos que fueron atribuidos, afectando su imagen en demérito de su reputación y dignidad.

Por lo expuesto, este Comité de Transparencia advierte la imposibilidad de la CASVISH para proporcionar los datos ya que de hacerlo se podría impactar negativamente en la opinión que la sociedad tiene en relación con las mismas, afectando su reputación.

Por lo tanto, este Comité de Transparencia determina la procedencia no dar a conocer los datos sobre información contenida en CFDI's, información proporcionada por el Contratista, información correspondiente a políticas contables, administrativas, económicas y jurídicas, información relativa a control interno, contractual, contable y de tecnologías de la información e información financiera y al mismo tiempo garantizar la protección de la información, en virtud de que el derecho de acceso a la información no reviste una naturaleza absoluta, sino que está sujeto a límites establecidos en otros supuestos fundados y constitucionalmente tutelados, como en el caso que nos ocupa; de ahí la obligación de los sujetos obligados a proteger la información de



naturaleza confidencial, en términos de lo dispuesto por los artículos 116, último párrafo de la LGTAIP y 113, fracción III de la LFTAIP, en correlación con el Trigésimo octavo, fracción II de los Lineamientos.

## **VERSIÓN PÚBLICA.**

En relación con la versión pública de setenta y siete resoluciones de verificación del dos mil dieciocho a las dos mil veintidós constantes de mil ochocientas cincuenta y ocho fojas útiles, es oportuno formular el análisis correspondiente de conformidad con los siguientes preceptos legales.

Los artículos 61, 111 y 137, inciso a) de la LGTAIP, disponen lo siguiente:

**“Artículo 61.** Los lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional establecerán los formatos de publicación de la información para asegurar que la información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, verificable.

*Estos lineamientos contemplarán la homologación en la presentación de la información a la que hace referencia este Título por parte de los sujetos obligados.”*

**“Artículo 111.** Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.”

**“Artículo 137.** En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:

*El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:*

**a) Confirmar** la clasificación...”.

Los artículos 106, 108, 118 y 140, fracción I de la LFTAIP, establecen lo siguiente:





*“**Artículo 106.** Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional para la elaboración de versiones públicas en materia de clasificación de la información reservada y confidencial, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados...”.*

*“**Artículo 108.** Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar **una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación...**”.*

*“**Artículo 118.** Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones reservadas o **confidenciales**, los sujetos obligados a través de sus áreas, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una **versión pública** en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación, en términos de lo que determine el Sistema Nacional.”*

*“**Artículo 140.** En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información requerida deban ser clasificados, deberá seguirse el procedimiento previsto en el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley General, atendiendo además a las siguientes disposiciones:*

*El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:*

**I. Confirmar** la clasificación...”

Por otra parte, los numerales Cuarto y Noveno de los Lineamientos, establecen lo siguiente:

*“**Cuarto.** Para **clasificar la información** como reservada o **confidencial**, de manera total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General.*

*Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.”*

*“**Noveno.** En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o secciones clasificadas, los titulares de las áreas deberán*



*elaborar una **versión pública fundando y motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen**, siguiendo los procedimientos establecidos en el Capítulo IX de los presentes lineamientos."*

Con base a la normatividad señalada, se considera información clasificada como confidencial la que se encuentra dentro del supuesto del artículo 113, fracción I, II y III de la LFTAIP y 116, párrafos primero, tercero y cuarto de la LGTAIP, la cual no está sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.

En virtud de lo anterior, este Comité de Transparencia aprueba la versión pública de setenta y siete resoluciones de verificación constantes de mil ochocientas cincuenta y ocho fojas útiles por contener datos personales.

Por lo tanto, este Comité de Transparencia considera que se actualiza la excepción al derecho de acceso a la información prevista en los artículos 116, párrafos primero, tercero y cuarto de la LGTAIP y 113, fracciones I, II y III de la LFTAIP, toda vez que divulgar datos personales de esas personas físicas, vulneraría el derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales que han sido ratificados por nuestro país.

### **ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO RESERVADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 110, FRACCIÓN VIII DE LA LFTAIP Y 113, FRACCIÓN VIII DE LA LGTAIP.**

Del análisis de las constancias, se desprende que la UPINTSH solicitó la clasificación de tres Resoluciones Finales de Verificación (RFV) como información reservada, misma que fue emitida por la CASVISH, mediante oficios 352-A-III-044; 352-A-059 y 352-A-III-20 de fechas, diecisiete de junio de dos mil veintiunos, veintiuno de febrero de dos mil veintidós y veintidós de octubre de dos mil veinte, en virtud de que su contenido actualiza la hipótesis prevista en los artículos 113, fracción VIII de la LGTAIP y 110, fracción VIII de la LFTAIP.

Ahora bien, con fechas seis de junio de dos mil veintidós, dieciséis de marzo y doce de abril del dos mil veintitrés, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), mediante oficios 230.213/2022, 230.222/2023 y



230.272/2023, solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se pronunciara respecto a participar en el **procedimiento de conciliación** solicitado por las personas morales a las que se llevaron a cabo las auditorías y a las que se notificaron las RFV (Contratistas), a efecto de modificar los términos de las RFV que nos ocupan.

En respuesta a las solicitudes anteriores, mediante oficios números 352-A-III-106, 352-A-III-051, y 352-A-III-052 de fechas ocho de noviembre del dos mil veintidós el primero y los otros dos del doce de mayo del dos mil veintitrés, respectivamente la CASVISH manifestó que, se proporcionaría la documentación y apoyo técnico en relación con la auditoría de la cual derivó la emisión de las citadas RFV.

Actualmente, los procedimientos de conciliación se encuentran en curso ante el conciliador autorizado por la CNH y los contratistas, partes de los Contratos.

Por lo anterior, este comité procederá a analizar la clasificación como reservada, conforme a los siguientes preceptos.

Los artículos 104, 113, fracción VIII, 114 y 137 inciso a) de la LGTAIP establecen lo siguiente:

**“Artículo 104.** En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;*
- II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y*
- III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio...”.*

**Artículo 113.** Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...

**VIII.** La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en



*tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada...”.*

**Artículo 114.** Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.

**Artículo 137.** En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:

**a) Confirmar** la clasificación;”

Los artículos 110, fracción VIII, 111 y 140 fracción I de la LFTAIP, refieren:

**“Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...

**VIII.** La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;”.

...

**“Artículo 111.** Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General.”

**“Artículo 140.** En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información requerida deban ser clasificados, deberá seguirse el procedimiento previsto en el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley General, atendiendo además a las siguientes disposiciones:







*El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:*

...

**I. Confirmar la clasificación...**

El numeral Vigésimo séptimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación, señala lo siguiente:

***“Vigésimo séptimo.** De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente:*

- I. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio;*
- II. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo;*
- III. **Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y***
- IV. **Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.”***

De la normatividad citada, se advierte que se considera información reservada aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva.

Para acreditar lo anterior y con fundamento en el artículo 104 de la LGTAIP, la CASVISH expuso lo siguiente:

**I. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio.**

Procedimientos de conciliación instaurados por cada uno de los Contratistas ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos los días once de mayo del dos mil veintidós, tres de abril del dos mil veintitrés y tres de



marzo del dos mil veintitrés, respectivamente, los cuales a la fecha se encuentran en curso.

Por lo anterior, se acredita la existencia de tres procedimientos deliberativos que se iniciaron con motivo de la emisión de las RFV, de los que, el resultado incidirá en la revaloración que, en su caso, se tendrá que realizar por parte de los servidores públicos de la UPINTSH, a efecto de cumplir con el acuerdo que derive de cada una de las conciliaciones.

En este sentido, es evidente que la información solicitada se encuentra sujeta a un procedimiento deliberativo, al tratar de modificar los resultados y efectos de las RFV, a través de una conciliación.

## **II. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo.**

La información solicitada consistente en las RFV en las cuales se determinaron ajustes a contraprestaciones, si ciertos costos incurridos bajo el Contrato para la Extracción de Hidrocarburos, son recuperables o no, y ajustes en el monto de los Activos, se emitieron con base en el análisis que se realizó a la siguiente información:

- i) Información registrada por los Contratistas en el Sistema de Información para los Pagos de las Asignaciones y Contratos de Hidrocarburos (SIPAC),
- ii) Datos, informes, documentos y demás información, proporcionada por los Contratistas y/o sus Partes Relacionadas o algún Tercero derivado de las labores de Verificación que realiza la SHCP.
- iii) Normatividad existente, tales como la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, "LINEAMIENTOS para la elaboración y presentación de los costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en los contratos y asignaciones; la verificación contable y financiera de los contratos, y la actualización de regalías en contratos y del derecho de extracción de hidrocarburos" (Lineamientos de Costos) y el Contrato; y



- iv) Los procedimientos internos de auditoría con los que cuenta la SHCP.

En este sentido, la CASVISH mediante el análisis, aplicación de la normatividad, así como, de los Contratos, realiza interpretaciones y toma criterios para la determinación del correcto cálculo de contraprestaciones, la procedencia o improcedencia de los costos incurridos y ajustes a los montos de los Activos, mismos que serán objeto de revisión mediante el proceso deliberativo en la conciliación.

Por lo anterior, la unidad administrativa señala que las resoluciones contienen criterios y puntos de vista de los servidores públicos que participan en la auditoría, por lo que el proporcionar la información causaría un gran perjuicio al procedimiento deliberativo que se lleva a cabo para la determinación de éstos al generar una ventaja hacia los Contratistas que sean auditados en un futuro, al conocer los citados criterios, en tal situación podrá considerarse como información reservada, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva.

**III. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo.**

- La información solicitada por el ciudadano se encuentra relacionada de manera directa con el procedimiento de conciliación y el juicio de amparo en contra de la sentencia interlocutoria emitida en el recurso de reclamación, los cuales versan sobre el contenido y efectos de la RFV.

**IV. Que su difusión pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.**

Al haberse solicitado el inicio del **procedimiento de conciliación** establecido en el contrato y, además se haya interpuesto demanda de nulidad ante el TFJA, podría implicar una modificación de la RFV, de tal forma que, la información solicitada aún **no es definitiva, por lo que su**



**difusión podría llegar a menoscabar la implementación de los asuntos sometidos a deliberación**, es decir, en el análisis realizado por los servidores públicos que resulta en determinaciones basadas en las disposiciones contractuales y normativas aplicables, así como en circunstancias particulares de la operación de las actividades petroleras realizadas por cada Contratista.

Dado lo anterior, la unidad administrativa consideró apoyarse del criterio 04/10 denominado *“Los documentos relacionados con las actuaciones del Órgano Interno de Control no necesariamente forman parte de un proceso deliberativo”* y el 16/13 denominado *“Insumos informativos o de apoyo. No forman parte de los procesos deliberativos”*, los cuales señalan lo siguiente:

**Criterio 04/10:**

En la clasificación de información con base en el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, **las dependencias y entidades deben distinguir claramente entre la información que en sí misma registra el proceso deliberativo o el sentido de la decisión**, y aquélla que no se relaciona de manera directa con la toma de decisiones como es el caso de un insumo informativo o de apoyo en un expediente del proceso deliberativo. **En el primer supuesto se tiene que la información se encuentra ligada de manera directa con los procesos deliberativos, y su difusión puede llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación e implementación del proyecto materia del proceso deliberativo**; mientras que la segunda no constituye en sí misma las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que constituyen el proceso deliberativo y, por tanto, su difusión no afecta de manera alguna la decisión que se pudiese llegar a adoptar.

**[Énfasis añadido]**

**Criterio 16/13:**

Al clasificar información con base en el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, **las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deben distinguir entre la información que en sí misma documenta el proceso deliberativo o el sentido de la decisión a adoptar**, de aquélla que no se relaciona de manera directa con la toma de decisiones, como es el caso de un insumo informativo o de apoyo del proceso deliberativo. **En el primer supuesto, se tiene que la información se encuentra ligada de manera**





**directa con los procesos deliberativos, y su difusión puede llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación e implementación del objeto materia del proceso;** mientras que los insumos informativos o de apoyo no forman parte de las opiniones, recomendaciones o puntos de vista del proceso deliberativo y, por tanto, su difusión no afecta la decisión que se pudiese llegar a adoptar.

**[Énfasis añadido]**

## **PRUEBA DE DAÑO.**

- 1) La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.**

Las RVF actualmente se encuentran relacionadas con dos procesos deliberativos iniciados con motivo de su emisión, de los cuales no se ha tomado una determinación final, por lo que al dar a conocer dicha información se podría afectar toma de decisiones y el proceso deliberativo de los servidores públicos adscritos a la UPINTSH, ya que existe la posibilidad de que factores externos puedan intervenir y afectar el resultado.

- 2) El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda.**

La difusión de la información ocasionaría un perjuicio en los procedimientos que se iniciaron con motivo de la emisión de la RFV, de los que, el resultado incidirá en la revaloración que en su caso, se tendrá que realizar por parte de los servidores públicos de esa unidad administrativa, a efecto de cumplir con el acuerdo que derive de la conciliación, o bien, de la sentencia que se emita en el juicio de nulidad, en el supuesto de que se otorgue el amparo al contratista, lo cual supera el interés de que sea difundida públicamente la información, al no ser definitiva y, por ello, carente de certeza.



**3) La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.**

Al no difundir la información de la RVF, la limitación es proporcional y representa el medio menos restrictivo, pues no existe otro supuesto jurídico o material que permita el acceso a la información sino hasta que se tome una decisión definitiva.

**PLAZO DE RESERVA.**

Con relación al periodo de reserva, la UPINTSH manifestó que la información relacionada con la RFV se encuentra clasificada como reservada por **cinco años**, periodo que comprende del doce de abril de dos mil veinticuatro al doce de abril de dos mil veintinueve, de conformidad con el último párrafo del artículo 99 de la LFTAIP, así como el Trigésimo cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación, toda vez que al estar en presencia de medios de solución de controversias, sobre todo en **procedimientos de conciliación**, existen diversas instancias y acciones jurídicas para resolverse en definitiva, lo que puede llevarse hasta cinco años o más.

Por lo anterior, este órgano colegiado considera que se actualiza la excepción al derecho de acceso a la información establecida en los artículos 113, fracción VIII de la LGTAIP y su correlativo 110, fracción VIII de la LFTAIP.

**ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO RESERVADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 110, FRACCIÓN XI DE LA LFTAIP Y 113, FRACCIÓN XI DE LA LGTAIP.**

La CASVISH manifestó que solicita la clasificación de las resoluciones emitidas mediante oficios **III. 352-A-III-020, IV. 352-A-III-021 y V. 352-A-III-043** de fechas, las dos primeras del veintidós de octubre de dos mil veinte y la última del veintidós de marzo de dos mil veintiuno toda vez que la difusión de las RFV vulneraría la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, en términos de la fracción XI del artículo 110 de la LFTAIP, en virtud de que dicha expresión documental se



encuentra controvertida por el contratista ante el TFJA, considerando que de admitirse la demanda y, como resultado del análisis de legalidad que realice el TFJA a la RFV, se podría declarar la nulidad de esta, o bien la nulidad para efectos (modificación) o la legalidad de la misma, por lo que no se puede considerar como definitiva hasta en tanto no cause estado.

Por lo anterior, este Comité procederá a analizar la clasificación como reservada, conforme con los siguientes preceptos.

Los artículos 104, 113, fracción XI, 114 y 137 inciso a) de la LGTAIP, establecen lo siguiente:

**Artículo 104.** *En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:*

V. *La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;*

VI. *El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y*

VII. *La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.”*

**“Artículo 113.** *Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

**XI.** *Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; (...)”*

**Artículo 114.** *Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.*

**Artículo 137.** *En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:*





*El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:*

**a) Confirmar** la clasificación;”

Los artículos 104, 110, fracción XI, 111 y 140 fracción I de la LFTAIP establecen lo siguiente:

**“Artículo 104.** *En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:*

*I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;*

*II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y*

*III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio*

**Artículo 110.** *Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

...

**XI.** *Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;*

**” Artículo 111.** *Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General.”*

**“Artículo 140.** *En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información requerida deban ser clasificados, deberá seguirse el procedimiento previsto en el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley General, atendiendo además a las siguientes disposiciones:*







*El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:*

**II.** *Confirmar la clasificación;*

Asimismo, el numeral Trigésimo de los Lineamientos, señalan que:

***“Trigésimo.*** *De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos:*

*I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite;*

*II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento, y*

*III. Que su difusión afecte o interrumpa la libertad de decisión de las autoridades dentro del juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.*

*Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurren los siguientes elementos:*

*1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y*

*2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.*





*No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada.*

De los preceptos citados se advierte que podrá clasificarse como reservada aquella información cuya publicación vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no causen estado.

Para acreditar lo anterior la UPINTSH refirió lo siguiente:

**I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite,**

Las RFV se encuentran controvertidas por el contratista ante el TFJA, por lo que se mantiene en trámite el procedimiento llevado a cabo por la CASVISH, ya que de admitirse la demanda y, como resultado del análisis de legalidad que realice el TFJA a la RFV, se podría declarar la nulidad de esta, o bien la nulidad para efectos (modificación) o la legalidad de la misma, por lo que no se puede considerar como definitiva hasta en tanto no cause estado, es por ello que se reitera que el mismo aún se encuentra en trámite.

**II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.**

Las resoluciones finales emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ejercicio de sus facultades de verificación, en las cuales determina si ciertos costos incurridos bajo un contrato de Exploración y/o Extracción son recuperables o no son recuperables.

En este sentido, cabe precisar que, el contenido de la RFV es producto de la aplicación del procedimiento previsto en los Lineamientos de Costos, es



decir, contiene el señalamiento de las actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento administrativo.

## **PRUEBA DE DAÑO**

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la LGTAIP se elaboró la siguiente prueba de daño:

### **I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.**

La divulgación de la información solicitada conllevaría, previo a que cause estado, un riesgo real, demostrable e identificable para el ejercicio, toda vez que, ocasionaría pérdidas en los ingresos del Estado que se traducirían en dejar de realizar proyectos prioritarios y estratégicos para el país que benefician a la población, tales como obras de infraestructura en educación y salud, y diversos servicios.

### **II. El riesgo de perjuicio supera el interés público general de que se difunda.**

La información que se pretende conocer con la solicitud, se encuentra directamente ligada, es decir guarda una estrecha relación con las constancias que integran un expediente que se encuentra pendiente de resolución, por lo que el riesgo al darla a conocer generaría un perjuicio, ya que para la verificación del correcto pago de las contraprestaciones establecidas en los contratos para exploración y extracción de hidrocarburos, los datos podrían ser utilizados de manera dolosa en perjuicio del Estado Mexicano y de los propios contratistas, ya que con dicha información las empresas del ramo o sector de hidrocarburos, pueden implementar estrategias o medidas que les permita incrementar la recuperación de costos y en consecuencia se verían afectados los ingresos del Estado Mexicano.



**III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.**

Al ser información que se vincula directa y estrechamente a expedientes judiciales y procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio que no han causado estado, por lo que resulta necesaria la reserva de la información requerida, ya que esta es adecuada al principio de proporcionalidad y constituye el medio menos restrictivo para evitar un perjuicio al hacer pública dicha información, ya que dar a conocer esta información se puede afectar o interrumpir la libertad de decisión de las autoridades dentro del juicio, ya sea dentro del procedimientos o en las decisiones finales de estos.

Para acreditar los elementos de reserva señalados en el Lineamiento Trigésimo de los Lineamientos Generales, se expone lo siguiente:

- La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite.

La UPINTSH indicó que la RFV se encuentra controvertida por el contratista ante el TFJA, por lo que se mantiene en trámite el procedimiento llevado a cabo por la CASVISH, ya que de admitirse la demanda y, como resultado del análisis de legalidad que realice el TFJA a la RFV, se podría declarar la nulidad de esta, o bien la nulidad para efectos (modificación) o la legalidad de la misma, por lo que no se puede considerar como definitiva hasta en tanto no cause estado.

- Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.

El contenido de la RFV es producto de la aplicación del procedimiento previsto en los Lineamientos de costos, es decir, contiene el señalamiento de las actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento administrativo.





- Que su difusión afecte o interrumpa la libertad de decisión de las autoridades dentro del juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.

El proporcionar la información se puede tornar en una afectación para las auditorías (procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio), toda vez que, el análisis realizado por los servidores públicos que resulta en determinaciones basadas en las disposiciones contractuales y normativas aplicables, así como en circunstancias particulares de la operación de las actividades petroleras realizadas por cada contratista, sin que ello resulte en un criterio aplicable para todas las auditorías que se lleven a cabo.

Por lo anterior, el difundir la información solicitada podría generar una falsa apreciación por parte de los contratistas si llegaran a ser sujetos de auditoría y pretendan presentar argumentos inequívocos sobre la base de las consideraciones que se vierten en las resoluciones, además de que la RFV al estar controvertida puede ser perfectible.

Adicionalmente, concurren los elementos señalados en el párrafo segundo, numerales 1 y 2 del Trigésimo de los Lineamientos:

1. En el procedimiento mediante el que se emite la RFV, la CASVISH actúa frente a un particular a efecto de revisar el correcto pago de las contraprestaciones establecidas en los contratos, mismo que se efectúa con base en la información contenida en el SIPAC, así como, la proporcionada por este, en términos de las estipulaciones del contrato, y de la normatividad aplicable.
2. La RFV emitida por la CASVISH cumple con las formalidades esenciales del procedimiento previstas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, se notifica el inicio del procedimiento en el cual se señala el objeto del mismo y se requiere información. Posteriormente se emiten dos informes (informe parcial y el informe de conclusión) en los cuales se otorgan plazos para que el particular tenga la oportunidad de presentar pruebas y realizar manifestaciones que desvirtúen las inconsistencias detectadas durante la verificación, por lo que de no desvirtuarlas o subsanarlas finalmente se emite una resolución final de verificación.

## **PLAZO DE RESERVA.**

La CASVISH estima necesaria la reserva de la información por un periodo de **cinco años**, ya que, al estar en presencia de medios de solución de controversias, conforme a la normatividad específica de cada uno, sobre todo en los juicios, existen diversas instancias y acciones jurídicas para resolverse, en definitiva, lo que puede llevarse hasta cinco años o más misma que comprende del trece de febrero de dos mil veintitrés al trece de febrero de dos mil veintinueve, de conformidad con el último párrafo del artículo 99 de la LFTAIP, así como el Trigésimo cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación.

En consecuencia, habiendo considerado los argumentos y la normativa aplicable al caso, de conformidad con los artículos 44, fracción II, 113 fracciones VIII y XI, 116, párrafos primero, tercero y cuarto y 137 de la LGTAIP, 5 fracción II, 110 fracciones VIII y XI, 113 fracciones I, II, y III y 140, fracción I de la LFTAIP y se:

## **RESUELVE**

**PRIMERO.** Se **confirma la inexistencia de la información** de las resoluciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el periodo comprendido entre los años dos mil quince al dos mil diecisiete.

**SEGUNDO.** Se **aprueba la versión pública** de setenta y siete resoluciones de verificación del dos mil dieciocho a las dos mil veintidós constantes de mil ochocientas cincuenta y ocho fojas útiles, conforme a lo previsto en los artículos 111 y 116 párrafos primero, tercero y cuarto de la LGTAIP, 108, 113, fracciones I, II y III y 118 de la LFTAIP, así como el numeral Noveno de los Lineamientos, en términos de los **CONSIDERANDOS SEGUNDO Y TERCERO.**

**TERCERO.** Se **confirma la clasificación de la información como confidencial** de los datos consistentes en: **nombre, domicilio y firma de personas físicas, volúmenes de producción, volúmenes y precios de comercialización, montos correspondientes al cálculo de las**



contraprestaciones, costos, gastos, inversiones del contratista, e inversiones recuperables por el contratista e información relativa proveedores y transferencias, información contenida en CFDI's, información proporcionada por el Contratista, información correspondiente a políticas contables, administrativas, económicas y jurídicas, información relativa a control interno, contractual, contable y de tecnologías de la información e información financiera contenidos en setenta y siete resoluciones de verificación consistentes en mil ochocientas cincuenta y ocho fojas útiles puestas a disposición por la CASVISH, en términos de los artículos 116, párrafos primero, tercero y cuarto de la LGTAIP; y 113, fracciones I, II y III de la LFTAIP, de conformidad con los motivos y fundamentos expuestos en los **CONSIDERANDOS SEGUNDO Y TERCERO** de la presente resolución.

**CUARTO.** Se confirma la clasificación de la información como **reservada** consistente en: Resoluciones Finales de Verificación (RFV), emitidas mediante oficios **352-A-III-044, 352-A-059 y 352-A-III-20**, determinada por la Coordinación de Análisis, Supervisión y Verificación de Ingresos sobre Hidrocarburos adscrita Unidad de Política de Ingresos no Tributarios y Sobre Hidrocarburos, de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los artículos 113, fracción VIII y de la LGTAIP y su correlativo 110, fracción VIII de la LFTAIP, así como el numeral Vigésimo séptimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación, de conformidad con los fundamentos y argumentos expuestos en el **CONSIDERANDO SEGUNDO y TERCERO** de la presente resolución.

**QUINTO.** Se confirma el periodo de reserva por cinco años de las Resoluciones Finales de Verificación emitidas mediante oficios **352-A-III-044, 352-A-059 y 352-A-III-20**, que comprende del doce de abril de dos mil veinticuatro al doce de abril de dos mil veintinueve, de conformidad con el artículo 99, párrafo segundo, de la LFTAIP y los argumentos expuestos en el **CONSIDERANDO TERCERO** de la presente resolución.

**SEXTO.** Se confirma la clasificación de la información como **reservada** la consistente en la Resolución Final de Verificación (RFV), emitidas mediante oficios **352-A-III-020, 352-A-III-021 y 352-A-III-043**, determinada por la Coordinación de Análisis, Supervisión y Verificación de Ingresos sobre Hidrocarburos adscrita Unidad de Política de Ingresos no Tributarios y Sobre Hidrocarburos, de la Subsecretaría de Hacienda y

Crédito Público, de conformidad con los artículos 113, fracción XI y de la LGTAIP y su correlativo 110, fracción XI de la LFTAIP, así como el numeral Trigésimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación, de conformidad con los fundamentos y argumentos expuestos en el **CONSIDERANDO SEGUNDO** y **TERCERO** de la presente resolución.

**SEPTIMO.** Se **confirma el periodo de reserva por cinco años** de las resoluciones Finales de Verificación emitidas mediante oficios **352-A-III-020, 352-A-III-021 y 352-A-III-043,** que comprende del doce de abril de dos mil veinticuatro al doce de abril de dos mil veintinueve, de conformidad con el artículo 99, párrafo segundo, de la LFTAIP y los argumentos expuestos en el **CONSIDERANDO TERCERO** de la presente resolución.

**OCTAVO.** En cumplimiento del artículo 3, fracción XV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en relación con el 7 de la LFTAIP, el particular podrá interponer, dentro de los quince días siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución por sí o a través de su representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 147 y 148 de la LFTAIP, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Avenida Insurgentes Sur No, 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, en esta Ciudad de México o ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El formato y forma de presentación del medio de impugnación, podrá obtenerlos en la página de Internet del mencionado Instituto, en la dirección electrónica [www.inai.org.mx](http://www.inai.org.mx)

**NOVENO.** Que, a través de la Unidad de Transparencia, se notifique al solicitante la presente resolución vía la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia: María del Socorro de Paz Fuentes, Coordinadora de Planeación, Operación y Servicios, en suplencia del Titular de la Dirección General de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales y Titular del Área Coordinadora de Archivos; Sandra Anel Villanueva Leal, Titular del Área de Especialidad en Control Interno, en el ramo Hacienda, en suplencia de la Titular del Órgano Especializado en Control Interno; y Juan Carlos Reyes Ballesteros, Director de Planeación Estratégica y





Transparencia, en suplencia del Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el artículo 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

María del Socorro de Paz Fuentes

Sandra Anel Villanueva Leal

Juan Carlos Reyes Ballesteros

